

GACETA PARLAMENTARIA

**Segundo Periodo Ordinario de Sesiones Mesa Directiva
Tercer Año de Ejercicio Legal
comprendido del 15 de enero al 30 de mayo de 2024
LXIV Legislatura 19 de marzo de 2024
Núm. de Gaceta: LXIV19032024**



CONTROL DE ASISTENCIAS
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MESA DIRECTIVA
TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA

Asistencia (A); Permiso (P); Falta (F). Retardo (R)

	FECHA	19	OBSERVACIONES
	NÚMERO DE SESIÓN	19ª.	
No.	DIPUTADOS		
1	Ever Alejandro Campech Avelar	✓	
2	Diana Torrejón Rodríguez	✓	
3	Jaciél González Herrera	✓	
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	
5	Vicente Morales Pérez	✓	
6	Lenin Calva Pérez	✓	
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	
9	Maribel León Cruz	✓	
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	✓	
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	
13	Bladimir Zainos Flores	✓	
14	Miguel Ángel Covarrubias Cervantes	✓	
15	María Guillermina Loiza Cortero	✓	
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	P	
17	Fabrizio Mena Rodríguez	P	
18	Blanca Águila Lima	✓	
19	Juan Manuel Cambrón Soria	✓	
20	Lorena Ruíz García	P	
21	Laura Alejandra Ramírez Ortíz	✓	
22	Rubén Terán Águila	✓	
23	Marcela González Castillo	✓	
24	Jorge Caballero Román	✓	
25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	

CONGRESO DEL ESTADO
LXIV LEGISLATURA
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
19- MARZO - 2024

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024.
2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **REFORMAN LAS FRACCIONES XIV Y XV, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA;** QUE PRESENTA LA DIPUTADA LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ.
3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA;** QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **EXPIDE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA;** QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA.
5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, PARA CREAR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO;** QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.
6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN MATERIA DE HABER DE RETIRO;
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y
JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, A EFECTUAR LA DESINCORPORACIÓN DEL REGISTRO PATRIMONIAL DE ESE MUNICIPIO, Y EJERCER ACTOS DE DOMINIO, MEDIANTE COMPRA-VENTA, RESPECTO DE CUARENTA Y SEIS UNIDADES VEHICULARES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.
8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, A QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y ARMONICEN SUS REGLAMENTOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE APIZACO, CHIAUTEMPAN, CUAPIAXTLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA, ESPAÑITA, IXTENCO, MAZATECOHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN HUACTZINCO, TEOLOCHOLCO, TEPETITLA DE LARDIZABAL, TEPEYANCO, TERRENATE, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCO, TOCATLÁN, XALOZTOC, XALTOCAN, ZACATELCO, ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, ALTLZAYANCA, LA MAGADALENA TLALTELULCO, NATIVITAS, PANOTLA, SAN JOSÉ TEACALCO, SANTA CRUZ QUILHETLA Y TETLATLAHUCA, PARA QUE EXPIDAN O ARMONICEN SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
10. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.
11. ASUNTOS GENERALES.

Votación

Total de votación: 19 A FAVOR

0 EN CONTRA

1. Declaran aprobación del **ORDEN DEL DÍA** de la sesión por **mayoría** de votos.

	FECHA	29	OBSERVACIONES
	NÚMERO DE SESIÓN	14ª.	
No.	DIPUTADOS		
1	Ever Alejandro Campech Avelar	✓	
2	Diana Torrejón Rodríguez	✓	
3	Jaciél González Herrera	✓	
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	
5	Vicente Morales Pérez	✓	
6	Lenín Calva Pérez	✓	
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	
9	Maribel León Cruz	✓	
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	✓	
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	
3	Bladimir Zainos Flores	✓	
14	Miguel Ángel Covarrubias Cervantes	X	
15	María Guillermina Loaiza Cortero	✓	
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	P	
17	Fabrizio Mena Rodríguez	P	
18	Blanca Águila Lima	✓	
19	Juan Manuel Cambrón Soria	✓	
20	Lorena Ruíz García	P	
21	Laura Alejandra Ramírez Ortiz	✓	
22	Rubén Terán Águila	X	
23	Marcela González Castillo	X	
24	Jorge Caballero Román	✓	
25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024.

Acta de la Décima Octava Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día **catorce** de marzo de dos mil veinticuatro.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, siendo las **diez** horas con **ocho** minutos del día **catorce** de marzo de dos mil veinticuatro, en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, actuando como secretarías las diputadas Mónica Sánchez Angulo y Reyna Flor Báez Lozano; enseguida el Presidente dice, se inicia esta sesión y, se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentra presente la **mayoría** de las diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Cuarta Legislatura; siendo las diputadas y diputados: **Ever Alejandro Campech Avelar, Diana Torrejón Rodríguez, Jaciel González Herrera, Mónica Sánchez Angulo, Vicente Morales Pérez, Lenin Calva Pérez, Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Lupita Cuamatzi Aguayo, Fátima Guadalupe Pérez Vargas, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Bladimir Zainos Flores, José Gilberto Temoltzin Martínez, Fabricio Mena Rodríguez, Juan Manuel Cambrón Soria, Lorena Ruíz García, Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Jorge Caballero Román y Reyna Flor Báez Lozano.** Enseguida el Presidente dice, para efectos de asistencia a esta sesión, las diputadas y **Diputado Maribel León Cruz, Blanca Águila Lima y Miguel Ángel Caballero Yonca,** solicitan permiso y la Presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: **1.** Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día doce de marzo

de dos mil veinticuatro. **2.** Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan los artículos 33 Bis y 124 Bis de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Jaciel González Herrera. **3.** Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. **4.** Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 36 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas. **5.** Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 46 Bis de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Bladimir Zainos Flores. **6.** Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 35 de la Ley para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendido para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Marcela González Castillo. **7.** Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza el esquema de concesión del “Libramiento de Calpulalpan”, en el que se otorguen los derechos para construir (incluyendo el diseño, permisos y liberación de derecho de vía), operar, conservar, mantener y explotar, por un plazo de treinta años; que presentan las comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y la de Movilidad, Comunicaciones y Transporte. **8.** Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. **9.** Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la **Secretaría** informa el resultado de la votación diciendo, **dieciocho** votos a favor y **cero** en contra; enseguida el Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por **unanimidad** de votos de los presentes. -----

----- A continuación el Presidente dice, para desahogar el **primer** punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día **doce** de marzo de dos mil veinticuatro; en uso de la palabra la **Diputada Mónica Sánchez Angulo** dice, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día **doce** de marzo de dos mil veinticuatro y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida el Presidente dice, se somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Mónica Sánchez Angulo, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, **dieciocho** votos a favor y **cero** en contra; acto seguido el Presidente dice, de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por **unanimidad** de votos de los presentes. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día **doce** de marzo de dos mil veinticuatro y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló.

----- Enseguida el Presidente dice, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al **Diputado Jaciel González Herrera**, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, **por el que se adicionan los artículos 33 Bis y 124 Bis de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala**; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, tórnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Contamos con la presencia de los alumnos y maestros de la Escuela Primaria “La Patria Eres Tú” de la Comunidad de San Diego Xocoyucan, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, sean bienvenidos a este Congreso del Estado, buenos días jóvenes. -----

----- Posteriormente el Presidente dice, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al **Diputado Juan Manuel Cambrón Soria**, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, **por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala**; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, tórnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. -----

----- Acto continuo el Presidente dice, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la **Diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas**, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, **por el que se reforma el artículo 36 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala**; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, tórnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. --

----- A continuación el Presidente dice, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al **Diputado Bladimir Zainos Flores**, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, **por el que se adiciona el artículo 46 Bis de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala**; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada a

conocer, tórnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. -

-----Enseguida el Presidente dice, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la **Diputada Marcela González Castillo**, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, **por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 35 de la Ley para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendido para el Estado de Tlaxcala**; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, tórnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. -----

----- Acto seguido el Presidente dice, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al **Diputado Jorge Caballero Román**, en representación de las comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y la Movilidad, Comunicaciones y Transporte, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, **por el que se autoriza el esquema de concesión del “Libramiento de Calpulalpan”, en el que se otorguen los derechos para construir (incluyendo el diseño, permisos y liberación de derecho de vía), operar, conservar, mantener y explotar, por un plazo de treinta años**; asimismo, apoyan en la lectura los diputados Fabricio Mena Rodríguez, Fátima Guadalupe Pérez Vargas, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, María Guillermina Loaiza Cortero y Lenin Calva Pérez; durante la lectura se incorporan a la sesión el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca y la Diputada Maribel León Cruz, quienes solicitaron permiso; una vez cumplida la orden el Presidente dice, queda de primera lectura el Dictamen presentado por las comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y la de Movilidad, Comunicaciones y Transporte; se concede el uso de la palabra al Diputado Lenin Calva Pérez. En uso de la palabra el **Diputado Lenin Calva Pérez** dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido el Presidente dice, se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Lenin Calva Pérez, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, **veinticuatro** votos a favor y **ceros** en contra; a continuación el Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por **unanimidad** de votos de los presentes; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto; haciendo uso de la palabra los **diputados Juan Manuel Cambrón Soria y Rubén Terán Águila**; enseguida el Presidente dice, en vista de que ninguna Diputada o Diputado más desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación; quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, **veintitrés** votos a favor y **uno** en contra; enseguida el Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por **mayoría** de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. -----

----- Enseguida el Presidente dice, continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso y en consecuencia, con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: **Secretaria** dice, oficio DIP.MACC/035/2024, que dirige el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia sin goce de percepción alguna para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de esta LXIV Legislatura, por tiempo indefinido, a partir del uno de abril del año dos mil veinticuatro, así mismo solicita tomar la protesta de Ley al suplente Luis Fernando de Anda Flores. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio DIP/BZF/014/2024, que envía el Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido, para separarse del cargo de Diputado, a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio 66/2024, que dirige la Diputada Lorena Ruíz García, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, a través del cual solicita a este


Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente dice, tórnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Secretaria dice,** oficio 234/DIP./BCVR/2024, que envía la Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente dice, tórnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Secretaria dice,** oficio DIP.MVP/020/2024, que envía el Diputado Vicente Morales Pérez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente dice, tórnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Secretaria dice,** oficio DIP/MSA/015/2024-RP, que envía la Diputada Mónica Sánchez Angulo, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente dice, tórnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Secretaria dice,** oficio LXIV/DIP.MGC/002-2024, que envía la Diputada Marcela González Castillo, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente dice, tórnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Presidente dice,** oficio DIPMLC/013/2024, que envía la Diputada Maribel León Cruz, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente, dejando sin efectos el previamente presentado con efectos al primero de abril de dos mil veinticuatro. **Presidente dice, tórnese a su expediente parlamentario LXIV 040/2024, para su estudio, análisis y**

dictamen correspondiente. Secretaria dice, oficio LXIV/EACA/2024/03, que envía el Diputado Ever Alejandro Campech Avelar, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio 0050/2024-DIP.MACY, que envía el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente, dejando sin efectos el previamente presentado con efectos al primero de abril de dos mil veinticuatro. **Presidente** dice, **túrnese al expediente parlamentario LXIV 042/2024, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio DIPJGH/095/2024, que envía el Diputado Jaciel González Herrera, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente, dejando sin efectos el previamente presentado con efectos al primero de abril de dos mil veinticuatro. **Presidente** dice, **túrnese al expediente parlamentario LXIV 041/2024, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio 200/DIPRFBL/03/2024, que envía la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio que envía el Diputado Rubén Terán Águila, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio DIPLCP/035/2024, que envía el Diputado Lenin Calva Pérez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir

del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio SGT/0217/2024, que envía el Lic. Luis Antonio Ramírez Hernández, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite a este Congreso la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala y del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. **Presidente** dice, **túrnese a las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio CESESP/DESP/2C.12/0157/2024, que dirige Maximino Hernández Pulido, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el cual remite a este Congreso el exhorto formulado por el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación y Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, por el que pone a consideración del Poder Legislativo del Estado, realizar un análisis normativo para que, con pleno respeto a los derechos humanos, la legislación permita implementar de manera obligada la extracción, aislamiento, conservación y resguardo de las muestras biológicas del personal de las instituciones de seguridad pública, para realizar su procesamiento y registro del Ácido Desoxirribonucleico (ADN). **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, para su atención.** **Secretaria** dice, copia del oficio SR/025-SDS/24, que envía María Angelina López Roldan, Regidora de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social del Municipio de Calpulalpan, a la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, quien le hace diversas manifestaciones en relación al Hospital General IMSS-BIENESTAR. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Salud, para su conocimiento.** **Secretaria** dice, escrito que envían integrantes de la Comisión Especial para la Declaratoria de la Semana Santa en Chiautempan como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala, a través del cual presentan ante este Congreso Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se declara a la Conmemoración de la Semana Santa, Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala. **Presidente** dice, **túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.** **Secretaria** dice, oficio número LXIV/CPCGJAP/DIP.RFBL/080/2024 que presenta la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, por el que informa que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos, llevará a cabo Sesión el día lunes 18 de marzo del año en curso, solicitando se habilite dicha fecha para la celebración de dicha sesión. **Presidente dice, se autoriza dicha solicitud. - - -**

----- Enseguida el Presidente dice, para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ninguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la palabra, y agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las **doce** horas con **diez** minutos del día **catorce** de marzo de dos mil veinticuatro, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día **diecinueve** de marzo de dos mil veinticuatro, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la presente que firma el Presidente ante las Secretarías que autorizan y dan fe. -----



C. José Gilberto Temoltzin Martínez

Dip. Presidente

C. Reyna Flor Báez Lozano

Dip. Secretaria

C. Mónica Sánchez Angulo

Dip. Secretaria

VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024.

	FECHA	19	OBSERVACIONES
	NÚMERO DE SESIÓN	19ª.	
No.	DIPUTADOS	20-0	
1	Ever Alejandro Campech Avelar	✓	
2	Diana Torrejón Rodríguez	✓	
3	Jaciel González Herrera	✓	
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	
5	Vicente Morales Pérez	✓	
6	Lenin Calva Pérez	✓	
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	
9	Maribel León Cruz	✓	
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	✓	
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	
13	Bladimir Zainos Flores	✓	
14	Miguel Ángel Covarrubias Cervantes	✓	
15	María Guillermina Loaiza Cortero	✓	
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	P	
17	Fabrizio Mena Rodríguez	P	
18	Blanca Águila Lima	✓	
19	Juan Manuel Cambrón Soria	✓	
20	Lorena Ruíz García	P	
21	Laura Alejandra Ramírez Ortiz	✓	
22	Rubén Terán Águila	X	
23	Marcela González Castillo	X	
24	Jorge Caballero Román	✓	
25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **REFORMAN LAS FRACCIONES XIV Y XV, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA**; QUE PRESENTA LA DIPUTADA LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ.

HONORABLE ASAMBLEA

La que suscribe Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Diputada integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, Representante del Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en los artículo 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta Soberanía, la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIV y XV y se adiciona la fracción XVI al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Las lenguas de señas, --como cualquier otro lenguaje—permiten la libertad de expresión y el intercambio de ideas. Fomentan el aprendizaje, la enseñanza, el trabajo y la participación en la vida pública y privada. El uso de la lengua de señas es también un derecho cultural de las personas sordas y constituye un factor esencial para preservar y promover su sentido de identidad y de comunidad.” Así lo

señalo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en 2019.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Más de 5% de la población mundial (430 millones de personas) padece una pérdida de audición discapacitante y requiere rehabilitación (432 millones de adultos y 34 millones de niños). Se calcula que en 2050 esa cifra superará los 700 millones (una de cada diez personas).

Respecto a México encontramos que existen 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales 34.4% tienen edad entre los 30 y 59 años, y 47.4% son mayores de 60 años. Las personas sordas, han adoptado una forma de comunicación propia, así como el desarrollo de costumbres y valores particulares.

La Lengua de Señas Mexicana forma parte del patrimonio lingüístico de nuestro país, reconocida oficialmente desde el 10 de junio de 2005 como una lengua nacional, perteneciente a la comunidad de sordos en México, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, la cual forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.

La comunicación es de gran importancia para el entendimiento del ser humano, está en su naturaleza buscar formas de comunicarse con los otros, es la única forma que permite unirse, entenderse, manifestar emociones, transmitir un mensaje, o información, para influir en los demás y/o ponerse de acuerdo, realizar actividades específicas en conjunto.

Cabe recordar que, cuando hablamos de garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos relativos a las cuestiones lingüísticas y las libertades fundamentales, también se busca motivar la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.

En este sentido, resulta impostergable atender la obligación del Estado para que en los mensajes gubernamentales y la atención en el servicio público de todo tipo se utilice la Lengua de Señas Mexicana, como una forma de promover la inclusión y de proteger el derecho a la información de las personas sordas en nuestra Entidad Federativa, que además impulse el aprendizaje del lenguaje de señas en toda la población que permita la consolidación de una sociedad más incluyente.

En este sentido debemos eliminar o reducir al mínimo las barreras a las que se enfrentan a diario las personas sordas, por una forma de buscar garantizar sus derechos humanos más fundamentales, siendo uno de ellos el acceso a la atención adecuada por parte del Servicio Público.

Bajo este contexto y justificación me permito proponer la presente iniciativa, cuyo objeto es garantizar constitucionalmente el uso de la Lengua de Señas Mexicana en las comunicaciones oficiales presenciales y en los procedimientos de atención al público en general, como parte de los derechos fundamentales que asisten a la comunidad de sordos en México.

De conformidad con las consideraciones antes expuestas, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se somete a la alta consideración del Pleno de esta Soberanía, **la Iniciativa con Proyecto de:**

DECRETO:

ÚNICO. – Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47, 52 y 54 fracción II de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 3 párrafo primero, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, **se reforman las fracciones XIV y XV y se adiciona la fracción XVI al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala**, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I a XIII. ...

XIV. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo;

XV. Toda persona tendrá derecho a que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y las provenientes de cualquier otra autoridad del Estado, sean emitidas en un lenguaje sencillo que cualquier persona pueda comprender, en medios impresos o electrónicos, mediante audio, en Sistema de escritura Braille,

Lengua de Señas Mexicana o traducción a lenguas indígenas, procurando en todo momento su accesibilidad; y

XVI. Toda persona tiene derecho a recibir información, asesoría, atención y acompañamiento, mediante Lengua de Señas Mexicana, para lo cual los poderes del Estado, organismos y órganos autónomos, municipios, y en general toda Institución o dependencia pública, están obligados a incorporar el Lenguaje de Señas Mexicana, en sus actos públicos u oficiales, comunicaciones presenciales y transmisión que realicen estos, así como en la prestación de servicios públicos o desempeño de las funciones que les competan, deberán contar con intérpretes en la misma, fomentando su aprendizaje y uso de manera generalizada.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, los Poderes del Estado, Organismos y Órganos Autónomos, Municipios y en general toda Institución o Dependencia Pública, implementarán el presente Decreto, en un término improrrogable de un año.

ARTÍCULO TERCERO.- Con fundamento en lo que establece el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario para que comunique el presente Decreto, a

los Poderes del Estado, Organismos y Órganos Autónomos, Municipios y en general toda Institución o Dependencia Pública,

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravenga el presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR

Dado en la Sala de Sesiones Xicohtécatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, a los 19 días del mes de marzo de 2024.

RESPECTUOSAMENTE
DIPUTADA LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE



3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO.



Diputada Marcela González Castillo

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Presentes.

Quien suscribe, Diputada Marcela González Castillo, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción I, 47, 48 y 54 de la Constitución Política de Tlaxcala, así como 9 fracción II y 10 apartado A, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como por demás disposiciones relativas y aplicables, someto a consideración, respetuosamente, del Pleno de esta Soberanía la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las personas que padecen alguna discapacidad al igual que todo habitante del Estado Mexicano, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.

Asimismo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.



Diputada Marcela González Castillo

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Es una realidad, que las personas con discapacidad se enfrentan a diversos obstáculos, que no les permiten su integración a la sociedad en igualdad de condiciones, por lo que es necesario implementar las medidas necesarias para ir eliminando progresivamente esas barreras.

En los procesos de carácter autocompositivo como los que regula la presente ley, para el caso de las personas con discapacidad auditiva, se considera indispensable el apoyo de personas traductoras de Lengua de Señas Mexicana, con la finalidad de que tengan la debida interpretación y comprensión de estos términos, y al mismo tiempo, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Durante las últimas décadas, ha cobrado relevancia el sector poblacional que padece algún tipo de discapacidad. Tanto a nivel nacional como internacional, los gobiernos, organizaciones, expertos y sociedad realizan esfuerzos de manera conjunta para eliminar las dificultades a las que se enfrentan en la vida práctica, tomando las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida y lograr su desarrollo integral.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) establece que el funcionamiento se puede considerar como un término global, que hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación; de manera similar, la discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad, o restricciones en la participación.¹

La discapacidad es una condición que se puede presentar en cualquier momento de la vida, ya sea de manera temporal o permanente, por ello, es necesario fomentar una cultura de respeto y de no discriminación hacia quienes la padecen.

En nuestro país, se han llevado a cabo diversos esfuerzos por implementar políticas y normas para garantizar la protección de los derechos de cada habitante, así como para fomentar la participación e integración social de las personas con discapacidad.

¹ Página Web del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/CIF_OMS_abreviada.pdf



Diputada Marcela González Castillo

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Así se deja atrás el enfoque tradicional del otorgamiento de garantías individuales por parte del Estado, para transitar a uno moderno en el que se reconocen los derechos humanos y sus garantías. Asimismo, todas las normas relativas a derechos humanos deben ser interpretadas conforme a la propia Constitución y los Tratados Internacionales.

Es así que la Carta Magna establece en su artículo 1 párrafos primero y último lo siguiente:

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...
...
...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”²

Desde el 30 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 constitucional, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con

² Página Web de la H. Cámara de Diputados. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/>



Diputada Marcela González Castillo

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948³, estipula que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, además de gozar de los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Asimismo, el 13 de diciembre de 2006 fue aprobada en la Sede de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad⁴, como un instrumento que reúne un catálogo de derechos humanos con un enfoque de desarrollo social.

En ella, se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

También, se han realizado diversos estudios a nivel internacional, como el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011⁵, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en donde se calcula que más de mil millones de personas, equivalente a un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4%).

La Encuesta Mundial de Salud señala que del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades significativas de funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3,8%) las personas con una "discapacidad grave" (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera).

³ Página Web del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU). <http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/>

⁴ Página Web de la Organización de las Naciones Unidas (ENABLE). <http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497>

⁵ Página Web de la Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf



Diputada Marcela González Castillo

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

En la actualidad el número de personas que tienen algún tipo de discapacidad ha ido en aumento, como consecuencia de la combinación de diversos factores, entre ellos, el envejecimiento de la población; las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiovasculares; y trastornos mentales. También influyen de manera importante, la pobreza extrema; mala calidad de los servicios de salud; los malos hábitos alimenticios; factores ambientales; entre otros.

Si bien, se han incrementado los esfuerzos para garantizar el pleno respeto y ejercicio de derechos de este sector social, éstos no han sido suficientes, ya que las exigencias de igualdad de oportunidades, de acceso a servicios de salud, a la educación, al empleo, entre muchas otras, no han sido satisfechas.

Sabemos que son diversos los obstáculos a los que se enfrentan las niñas, niños, mujeres y hombres con discapacidad, por lo que las y los legisladores estamos obligados a trabajar en el establecimiento de normas que les permitan integrarse a la sociedad en igual condición de oportunidades, desarrollar sus capacidades, pero sobre todo, tener resultados positivos y perceptibles en todos los aspectos de su vida cotidiana.

En el caso de la discapacidad en la audición o sordera, la Organización Mundial de la Salud estimaba que en el 2004, más de 275 millones de personas en el mundo padecían defectos de audición entre moderados y profundos; el 80% de ellos vivía en países de ingresos bajos y medianos.⁶

La investigación lingüística ha demostrado que las lenguas de señas de las personas con sordera son verdaderos idiomas, que le dan al individuo y a la colectividad tanta capacidad de expresión y abstracción como cualquier otra lengua humana. Asimismo, cada lengua de señas tiene su propia gramática y vocabulario.

Para que las personas que padecen esta discapacidad puedan comunicarse, se crea el instrumento denominado Lengua de Señas Mexicana, que consta de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifica y expresa la comunidad de personas con discapacidad auditiva mexicana. Para la gran mayoría de quienes han nacido sordos o han padecido sordera desde la infancia o juventud, esta es la lengua en que articulan sus pensamientos y emociones, la que les permite

⁶ Página Web de la Organización Mundial de la Salud. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/>



Diputada Marcela González Castillo

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que les rodea.

Si bien, muchas personas con discapacidad auditiva viven su discapacidad en la soledad, muchos otros han desarrollado verdaderas comunidades, con sus propios patrimonios culturales y en particular, con sus propios idiomas, las lenguas de señas. Las personas con discapacidad auditiva forjan su identidad social en estas comunidades, en ellas el sordo no se percibe como alguien con discapacidad, sino más bien, como parte de un grupo diferente al resto de la mayoría oyente, más no necesariamente inferior, ni enfermo.

Las personas que sufren alguna discapacidad resultan más vulnerables que el resto de la población, ya que requieren de un apoyo especial que les posibilite interactuar con el resto de la población y su entorno.

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, cuya herramienta de comunicación es la Lengua de Señas Mexicana, encontramos que palabras o términos jurídicos, no tienen un signo distintivo, por lo que resulta indispensable que quienes se enfocan a la labor de mediación como especialistas, contemplen la incorporación de traductores en asuntos que competan a este grupo poblacional.

La participación de los traductores de lengua de señas mexicana es indispensable en el ámbito legal, por lo que carecer de símbolos claros en la Lengua de Señas Mexicana, genera una enorme dificultad de comprensión para las personas que padecen esta condición, por lo que se considera indispensable incorporarles en los procesos de justicia alternativa en el Estado de Tlaxcala.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa que contiene:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se **ADICIONA** un segundo párrafo al Artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:



Diputada Marcela González Castillo

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

LEY DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Artículo 32. A fin de facilitar la comunicación entre los interesados y en cualquier momento del procedimiento, el especialista podrá solicitar el auxilio de un asesor en psicología, cuando el conflicto emotivo impida llegar a un acuerdo.

En caso de personas con discapacidad auditiva, el especialista deberá contemplar el apoyo de personal interprete de lengua de señas mexicana.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias a la presente Ley.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 15 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro.



Dip. Marcela González Castillo

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE



4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **EXPIDE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA**; QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA.



TLAXCALA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

**DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Presentes.



Quienes suscriben, **Diputada Marcela González Castillo, Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Diputado Jorge Caballero Román, Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, Diputada María Guillermina Loiza Cortero, Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, Diputado Rubén Terán Águila, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas, Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Diputado Fabricio Mena Rodríguez, Diputada Blanca Águila Lima, Diputada Diana Torrejón Rodríguez, Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, Diputado Ever Alejandro Campech Avelar, Diputada Mónica Sánchez Angulo, Diputado Jaciel González Herrera, Diputada Maribel León Cruz, Diputado Lenin Calva Pérez, Diputado Bladimir Zainos Flores, Diputada Reyna Flor Báez Lozano, Diputada Lorena Ruiz García**; en nuestro carácter de integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción I, 47, 48 y 54 de la Constitución Política de Tlaxcala, así como 9 fracción II y 10 apartado A, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como por demás disposiciones relativas y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país los derechos de las víctimas han recorrido un largo trayecto hacia su pleno reconocimiento por parte del orden jurídico mexicano, pasando desde diversas modificaciones a la Constitución y a leyes generales y estatales hasta la capacitación del personal de procuración de justicia.



El texto original de la Constitución de 1917 no contiene ninguna referencia o disposición en la que se reconociera la calidad de víctima y de ofendidos del delito, quizás el contexto histórico de la misma no lo requería, lo cierto es, que únicamente se reconoció los diversos derechos de los inculpados sin atender, como se mencionó, a las víctimas y ofendidos del delito.

Por otra parte, la legislación procesal penal de 1934 negó al ofendido desde un principio la posibilidad de ser parte en el procedimiento penal, lo cual significaba la ausencia total de las expectativas mínimas que se necesitaban reconocer para poder acceder a la justicia penal; nada más se le reconocía su pretensión resarcitoria bajo un paradigma civilista.

Así, la tradición legislativa, jurisprudencial y doctrinaria en México escribió la primera página de injusticia en perjuicio de la víctima; incluso, alguna parte de la teoría ve todavía con desdoro, el hecho de que tal personaje del procedimiento penal haya ganado terreno en los últimos años bajo el discurso de los derechos pro víctima. Lo cierto es que la víctima estuvo ignorada hasta que toma auge el movimiento victimológico o de redescubrimiento de las víctimas, dando nacimiento a la victimología, definida como "el estudio científico de las víctimas" en el Primer Simposio Internacional, celebrado en Jerusalén en 1973.

El movimiento victimológico promovió la expedición de programas de asistencia a las víctimas, para compensar económicamente las pérdidas producidas por la victimización, sufragar los gastos médicos, resarcir la incapacidad para el trabajo, ayudar a los dependientes de víctimas fallecidas y compensar el sufrimiento.

En el ámbito internacional, México suscribió en 1985 la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la cual a través de la resolución 40/34 considera, entre otras cosas, 17 principios fundamentales para la protección de las víctimas del delito y 4 para las víctimas de abuso de poder.

Asimismo, se añaden otros instrumentos internacionales adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que abordan el tema de víctimas, tales como: las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de Menores ("Reglas de Beijing"), a través de la resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) respectivamente en sus resoluciones 45/110 y 45/112, ambas del 14 de diciembre de 1990; y los Principios y directrices básicos sobre el derecho



de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, a través de la resolución 60/147, el 16 de diciembre de 2005.

Retomando nuestro ámbito nacional, anteriormente, el artículo 20 de nuestra Constitución únicamente contemplaba los derechos del acusado en el proceso penal pero fue con la reforma constitucional publicada el 3 de septiembre de 1993, que adicionó un párrafo a este artículo en materia de víctimas del delito, el cual determinaba: *"En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes"*.

En el año 2000 se incorporó al texto de la Carta Magna el actual apartado "C" del artículo 20, con ello se introdujo un catálogo de derechos exclusivos de las víctimas en la Constitución. Con esta reforma se reconocieron de manera puntual y suficiente los derechos de las víctimas, cuestión que quedó a un lado en la reforma de 1993. De este modo se les reconoce el mismo nivel de jerarquía e importancia a los derechos del inculpado como los derechos de las víctimas del delito.

Con las reformas Constitucionales del 18 de junio de 2008 que estableció el Sistema Penal Acusatorio, y las del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, la víctima adquirió el rol de sujeto procesal con derechos derivados de la legislación nacional y de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección.

En la práctica, lamentablemente, tales derechos han sido desprotegidos y un estado social y democrático de derecho debe reconocer que el sistema de justicia penal debe brindar el propósito de tutelar los bienes jurídicos de la persona inculpada, de las víctimas y ofendidos y de toda la sociedad. Sólo una solución global que involucre la instauración de figuras jurídicas que garanticen los intereses de los principales afectados que aparecen en la escena penal brindará normas justas para enfrentar el problema de la inseguridad social que se origina con motivo de la comisión de hechos delictivos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (en adelante ENVIPE) del año 2021 presentada por el INEGI ha señalado que el 29.2% de los hogares tlaxcaltecos tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2020, pero es peor el panorama que se desdibuja con las cifras negras y es que en la ENVIPE



se estima que en 2020 en el Estado de Tlaxcala se denunció sólo el 10.5% (en 2019 esta cifra fue el 12%) de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación en 54.1% de los casos, (en 2019 esta cifra fue de 53.5%) empero del total de Carpetas de Investigación iniciadas, en un 48.4% de los casos "no pasó nada" o no se continuó con la investigación.

Aunado a lo anterior, entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con 25.5% y la desconfianza de la autoridad con un 14.9% dentro de las causas atribuibles a la autoridad, también resaltan como causas los trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad.

La misma encuesta estima que en el Estado de Tlaxcala, 63% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad federativa, seguido del desempleo y la salud. La ENVIPE menciona que el 63% de la población mayor de 18 años consideran que su entorno es poco seguro.

El Estado debe garantizar la convivencia pacífica de la sociedad y el cumplimiento de la ley; debe perseguir el delito con instrumentos idóneos y aplicados de manera eficaz y eficiente. También tiene la obligación de prestar apoyo total y protección inmediata a la víctima del delito, satisfaciendo así uno de los reclamos más sentidos de la población, crear mecanismos para garantizar los derechos y las garantías de las víctimas.

Con fecha 9 de enero del 2013, se publicó la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación cuyo objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, en especial el de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, entre otros reconocidos en la Constitución Federal y Tratados Internacionales; establecer y coordinar acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de esos derechos e implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de competencia prevengan, investiguen, sancionen y garanticen la reparación integral. El ordenamiento normativo ha tenido diversas adiciones, derogaciones y reformas como la del pasado 28 de abril en materia de paridad de género.

A raíz de la publicación de la Ley General de Víctimas, el 3 de mayo de 2014 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, cuya última reforma data del 28 de noviembre de 2014.

Inclusive, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, notificó el 16 de agosto de 2021, a la persona Titular del Ejecutivo del Estado, el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/06/2020 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala.

Consecuentemente, el 18 de agosto de 2021, la autoridad federal antes enunciada resolvió la solicitud, Declarando la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida para sus municipios y el Estado de Tlaxcala. En su resolutive Tercero, apartado A, fracción **VIII**, de la resolución de AVGM para el Estado de Tlaxcala¹, y Sección **6**. "Armonización Legislativa" del Informe que contiene el análisis e investigación de la solicitud², en el que el grupo de trabajo recomienda al Gobierno del Estado fortalecer las disposiciones contenidas en la **Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala**, y consideran importante: incluir perspectiva de género, lenguaje incluyente y enfoque de derechos humanos; garantizar expresamente el respeto de los derechos de las víctimas sobrevivientes e indirectas y su participación en el proceso penal; y nombrar la garantía a los servicios de anticoncepción de emergencia y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, enuncia como una política estratégica: Empezar la construcción de la paz, donde converge la estrategia de seguridad, que considera promover la adopción de modelos de justicia transicional que **garanticen los derechos de las víctimas para garantizar la reparación del daño**, así como acceder a la verdad, la justicia y la no repetición posterior a periodos de conflicto, represión y/o niveles de violencia a gran escala y de alto impacto.

Asimismo, el Plan Estatal contempla como estrategia general del Eje Transversal 1. Género e igualdad el impulsar una política de inclusión y perspectiva de género de alcance estatal, que fortalezca los programas, proyectos y acciones afirmativas para incidir en el establecimiento de condiciones de igualdad entre mujeres y hombres,

¹ **TERCERO.** Con fundamento en la fracción I del artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso, se emiten las siguientes:

A. Medidas de prevención

[...]

VIII. Instalar una mesa de trabajo interinstitucional que genere una agenda legislativa que garantice la protección más amplia de las mujeres y las niñas en la entidad, la cual debe revisar y analizar la legislación vigente en el estado y armonizarla con los ordenamientos nacionales e internacionales que favorecen la protección de los derechos humanos de las mujeres, en términos de la Sección 6 del Informe que contiene el análisis e investigación de la solicitud de AVGM.

[...]

² Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM06/2020 de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el Estado de Tlaxcala, pp. 144-170. Visible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/625666/informe_Solicitud_AVGM_Tlaxcala_12_08_2021_1.pdf



en los ámbitos social, económico, político y cultural, con la participación de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, y las Organizaciones No Gubernamentales.

El Estado ha previsto implementar la perspectiva de género como política general, en el Programa 69. Denominado Empoderamiento integral de las mujeres, contempla el Objetivo 5. Prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar una vida digna, y como Líneas de acción 3 y 6 el Cumplir con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género en la competencia y coordinar las acciones y medidas de seguridad, prevención y justicia para atender la violencia contra las mujeres, así como la reparación del daño en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

De ahí que, en Tlaxcala es necesario tener una legislación debidamente armonizada con la Ley General de Víctimas, con el propósito de formar parte del Sistema Nacional de Víctimas en los términos señalados en el artículo 79 de la ley en cita. Por otra parte, este proyecto de Decreto nos permitirá cumplir con lo señalado en el Capítulo III relacionado a las entidades federativas y que en su artículo 118 de la referida legislación, establece las obligaciones, atribuciones, competencias y facultades que nos corresponde como Estado integrante de la federación.

En esta tesitura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala consta de 10 Títulos, 42 Capítulos y 180 artículos, en su diseño estructural se contemplan: el objeto, conceptos, principios y definiciones de la Ley; derechos de las víctimas; medidas de ayuda, de asistencia, atención y de reparación integral; creación, objeto, integración, estructura operativa del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, el registro e ingreso de víctimas al Registro Estatal; distribución de competencias; objeto, integración y administración del Fondo de ayuda, asistencia y reparación de daño a las víctimas; capacitación, formación, actualización y especialización; y asesoría jurídica de atención a víctimas.

Su contenido se ha redactado con perspectiva de género, además de incorporar su concepto, se utiliza un lenguaje incluyente, de forma expresa se hace alusión al enfoque de transversalidad de género, diferencial y de derechos humanos.

En cuanto a la estructura operativa del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, se otorga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala la naturaleza jurídica de organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno, lo que le permitirá tener personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. De la Comisión Ejecutiva dependerá la Asesoría Jurídica, el Registro y el Fondo, este último tiene por objeto brindar los recursos



necesarios para otorgar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

De forma focalizada y en pro de los derechos de niñas y mujeres víctimas, la Comisión Ejecutiva, tendrá una Unidad de Atención a Mujeres Víctimas, como un área especializada en brindar atención victimológica a niñas y mujeres, a través de personal femenino sensibilizado y capacitado en derechos humanos y perspectiva de género.

La Unidad tendrá como objeto contener los efectos de la victimización a través de una atención victimológica integral y efectiva, otorgando de manera oportuna asistencia jurídica, médica, psicológica y social, para el restablecimiento de sus derechos humanos de forma segura, confiable y protectora.

Todo el personal que labore para la Comisión Ejecutiva, se sujetará a una profesionalización, capacitación y formación permanente en perspectiva de género y todos los tópicos que les permitan realizar un proceso de mejora continua en su desempeño.

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas, emitió Dictamen de la Estimación del Impacto Presupuestario del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala, en el que determina: 1) **No existe afectación financiera** en la implementación de la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala, siempre que se considere que la estructura administrativa del anterior "Fondo", quedará incorporada a la estructura de la Comisión, y por tanto, el primero, no es un área independiente o subordinada a la Comisión; 2) La afectación financiera de la implementación de la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala, no tiene un **efecto negativo en el balance presupuestario sostenible** del Estado de Tlaxcala 2023; y 3) **Dictamina favorable el impacto presupuestario** de la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala.

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración del Congreso del Estado de Tlaxcala la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO



DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio del Estado de Tlaxcala. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

De conformidad por lo dispuesto por los artículos 1°, 17, 20 y 73 fracción XXIX-X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones en la materia, se favorecerá en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas serán implementadas a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

- I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea Parte y demás instrumentos en la materia;
- II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de su competencia cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;



TLAXCALA

- III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;
- IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de toda aquella persona que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas, y
- V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

CAPÍTULO II CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 4. Se denominarán:

- I. **Victimas directas.** Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, patrimonial, sexual o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos, dignidad, integridad o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en los Tratados Internacionales de lo que el Estado Mexicano sea Parte.
- II. **Victimas indirectas.** Familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
- III. **Victimas potenciales.** Las personas físicas cuya integridad física o derechos pelguren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
- IV. **Victimas grupos, comunidades u organizaciones sociales.** Todas las personas que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de

que se identifique, aprehenda o condene a la persona responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

- I. **Dignidad.** La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona;

- II. **Buena fe.** Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos;
- III. **Complementariedad.** Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en la Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación;



TLAXCALA

- IV. Debida diligencia.** El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como personas en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas;

- V. Enfoque diferencial y especializado.** Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, integrantes de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamientos interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la niñez.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad;

- VI. Enfoque transformador.** Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes;



VII. Gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima;

VIII. Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial;

IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada;

X. Interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescente, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales;

XI. Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas;

XII. Mínimo existencial. Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia;

XIII. No criminalización. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse;

XIV. Victimización secundaria. Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de las personas servidoras públicas;

XV. Participación conjunta. Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos;

XVI. Progresividad y no regresividad. Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados;

- XVII. Publicidad.** Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con lo que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible;

- XVIII. Rendición de cuentas.** Las autoridades y funcionariado encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas;

- XIX. Transparencia.** Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas;

- XX. Trato preferente.** Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas; y

- XXI. Perspectiva de Género.** Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Artículo 6. Para efectos de interpretación, se entenderá por:



TLAXCALA

- I. **Asesora Jurídica:** A la persona Asesora Jurídica de Atención a Víctimas adscritas a la Comisión Ejecutiva;
- II. **Asesoría Jurídica:** La Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas;
- III. **BANAVIM:** Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;
- IV. **Comisión Ejecutiva:** La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala;
- V. **Compensación:** Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;
- VI. **Daño:** Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes propiedad de la persona responsable de los daños, pérdidas de ingreso directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten;
- VII. **Delito:** Acto u omisión que sancionan las leyes penales;
- VIII. **Fondo:** El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas;
- IX. **Hecho victimizante:** Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;
- X. **Ley:** Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala;
- XI. **Ley General:** Ley General de Víctimas;



TLAXCALA

- XII. Medidas de Ayuda:** Medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos tercero, cuarto y quinto de la Ley, que corresponda cubrir al Estado, en el ámbito de su competencia;
- XIII. Plan:** El Plan Estatal Integral de Atención a Víctimas;
- XIV. Procedimiento:** Los procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;
- XV. Procuraduría:** La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala;
- XVI. Programa:** El Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas;
- XVII. Registro:** Registro Estatal de Víctimas;
- XVIII. Reglamento:** Reglamento de la Ley;
- XIX. SEDIF:** Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
- XX. Sistema:** Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
- XXI. Titular de la Comisión Ejecutiva:** La persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
- XXII. Transversalidad:** Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;
- XXIII. Unidad:** Unidad de Atención a Mujeres Víctimas; y
- XXIV. Violación de derechos humanos:** Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea una persona del servicio público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor o servidora pública, o cuando actué con aquiescencia o colaboración de un servidor o servidora pública.



**TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS**

**CAPÍTULO I
DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS**

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los derechos siguientes:

- I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables de los delitos y de violaciones a los derechos humanos y a su reparación integral;
- II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencias de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones le causaron;
- III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;
- IV. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de las personas servidoras públicas y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como de particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;
- V. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personas especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
- VI. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;



- VII.** A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior, incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;
- VIII.** A solicitar y a recibir información clara, precisa, accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;
- IX.** A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;
- X.** A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;
- XI.** A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;
- XII.** A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;
- XIII.** A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;
- XIV.** A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;
- XV.** A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;
- XVI.** A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;



- XVII.** A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;
- XVIII.** A beneficiarse de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;
- XIX.** A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
- XX.** A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente de atención a la infancia, de las personas adultas mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;
- XXI.** A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
- XXII.** A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
- XXIII.** A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;
- XXIV.** A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;
- XXV.** A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todas las personas responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;
- XXVI.** A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;
- XXVII.** A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondiente y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;
- XXVIII.** Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;

TLAXCALA

- XXIX.** A que se les otorgue, las medidas de ayuda y asistencia de la Comisión Ejecutiva en términos de la presente Ley;
- XXX.** A recibir gratuitamente la asistencia de una persona intérprete o traductora de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;
- XXXI.** A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;
- XXXII.** A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;
- XXXIII.** Toda comparecencia ante el órgano investigador, persona judicial o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;
- XXXIV.** La protección de las víctimas del delito de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las personas intervinientes o colaboradoras en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;
- XXXV.** Acceso universal a la justicia, mediante la asesoría jurídica especializada que el Estado proporcione por sí, a través de convenios con organizaciones de defensa de derechos humanos pertenecientes a la sociedad civil o de instituciones privadas, debidamente especializadas y certificadas en el rubro de la representación y la asesoría en materia penal; el órgano jurisdiccional; el tribunal de enjuiciamiento; el tribunal de alzada y, en su caso, los jueces de ejecución dictarán las medidas conducentes encaminadas a que se materialice este derecho en la respectiva etapa procesal, en todo lugar en que se desarrolle el proceso;
- XXXVI.** El Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, deberán garantizar el derecho de las víctimas a tener un período de espera y estabilización física y



TLAXCALA

psicoemocional, cuando no se encuentren en condiciones de rendir su declaración;

- XXXVII.** Tener acceso ágil, eficaz y transparente a las medidas de ayuda del Fondo en términos de esta Ley, y
- XXXVIII.** Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

CAPÍTULO II DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida del Fondo de la Comisión Ejecutiva, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere la situación de emergencia.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán atención médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Las personas servidoras públicas deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas del gobierno estatal y municipal en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión Ejecutiva deberá otorgar, con cargo al Fondo, las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere la situación de emergencia y en tanto, las instancias que conforman el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, brinden los servicios necesarios para su atención, siempre y cuando tenga relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo, según corresponda.

La Comisión Ejecutiva, en el ámbito de su competencia, deberá otorgar, con cargo al Fondo, el apoyo necesario que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de emergencia que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva requerirá a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia la presente Ley y su reglamento.

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.



Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo a las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.

CAPÍTULO III DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones a derechos humanos sufridas por ellas; a que las personas autoras de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciadas y sancionadas; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

CAPÍTULO IV DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales aplicables y en los Tratados Internacionales.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los derechos siguientes:

- I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;
- II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos

TLAXCALA

en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver a la persona responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesora Jurídica no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

- III. A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;
- IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por una Asesora Jurídica. En los casos en que no quieran o no puedan contratar una abogada o un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;
- V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;
- VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;
- VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de sus testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;
- VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificadas dentro de la audiencia, teniendo la obligación quien juzgue de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;
- IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;
- X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y



TLAXCALA

persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

- XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;
- XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y
- XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de personas expertas independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de personas expertas revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

La Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos autorizados del Fondo, podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de personas expertas independientes o quienes funjan como peritos a que se refiere el párrafo anterior.

Solo se podrán contratar servicios de personas expertas independientes o en peritajes internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 13. Cuando la persona imputada se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omite comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio de autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos las personas fiadoras están obligadas a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen.



Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por una Asesora o Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia.

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesora o Asesor Jurídico o la persona que consideren.

La Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos autorizados para tal fin del Fondo a su cargo, podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior.

Sólo se podrán contratar servicios de personas expertas independientes o en peritajes internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 16. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión.

El Ministerio Público y la Procuraduría llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión.

Se sancionará al personal servidor público que conduzca a las víctimas a tomar decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.

CAPÍTULO V DERECHO A LA VERDAD

Artículo 17. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos de delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de las personas responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Artículo 18. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.

Artículo 19. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.

Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

Artículo 20. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tienen la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, el máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.

Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

La familia de las víctimas tiene el derecho a **estar** presente en las exhumaciones, por sí y/o a través de quien la asesore jurídicamente; a ser informada sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

La Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos autorizados, podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad a los lineamientos que se emitan para dicho efecto. Sólo se podrán contratar servicios de personas expertas independientes o de peritajes internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de sus familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración



especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes en la materia, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 21. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:

- I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;
- II. La determinación de las responsabilidades individual o institucional de los hechos;
- III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas;
- IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación; y
- V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.

Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y testigos, asegurándose su presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por medio de quienes sean sus representantes.

La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con las debidas formalidades de ley.

Artículo 22. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

Artículo 23. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.

El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como personas investigadoras que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.

En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.

Artículo 24. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le



conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

CAPÍTULO VI DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 25. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Artículo 26. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

- I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;
- II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
- III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;
- IV. La satisfacción busca reconocer y reestablecer la dignidad de las víctimas;
- V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;
- VI. Para los efectos de la Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos



individuales de sus miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados;

- VII.** La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de las víctimas u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite, y
- VIII.** La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando en el delito participe una persona servidora pública o agente de autoridad, lo anterior con independencia de otras responsabilidades en que incurra el Estado por la omisión de cumplimiento en la presente Ley.

Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito de feminicidio, el órgano jurisdiccional de conocimiento deberá condenarla al pago de la reparación integral del daño, a favor de las víctimas u ofendidos, en todos los casos

Las personas servidoras públicas o agentes estatales que actúen a título oficial y cometan cualquiera de los delitos materia de esta Ley, las víctimas serán resarcidas por el Estado, conforme a la legislación en materia de responsabilidad patrimonial estatal.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse de manera subsidiaria, con cargo a los recursos autorizados para tal fin en el Fondo, de conformidad a los lineamientos que se emitan para dicho efecto.

TÍTULO TERCERO MEDIDAS DE AYUDA



CAPÍTULO I MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA

Artículo 27. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuesto a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo al Fondo, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 28. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 29. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

- I. Hospitalización;
- II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;
- III. Medicamentos;
- IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;
- V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;



TLAXCALA

- VI. Transporte y ambulancia;
- VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;
- VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos;
- IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y
- X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

Artículo 30. El Estado o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias correspondientes a la Comisión Ejecutiva.

Artículo 31. El Gobierno Estatal a través de sus dependencias y entidades de salud pública estatal, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las instituciones obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

Artículo 32. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

TLAXCALA

- I. A que se proporcione de manera gratuita atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos del Estado y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el personal médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;
- II. El Gobierno Estatal a través de las dependencias y entidades de salud pública estatal, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;
- III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la fórmula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se les canalizará a las y los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;
- IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el personal médico especialista en la materia, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;
- V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y
- VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.



Artículo 33. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Artículo 34. El Gobierno Estatal a través de las dependencias y entidades de salud pública estatal, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

CAPÍTULO II MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Artículo 35. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPÍTULO III MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO



Artículo 36. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

Artículo 37. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

- I. Formular denuncia o querrela a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;
- II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatal de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;
- III. Solicitar a alguna institución estatal medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional o, existan razones fundadas, y
- IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución estatal, pública o privada cuando así sea autorizado en términos de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

CAPÍTULO IV MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN

Artículo 38. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades estatales o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:

TLAXCALA

- I. **Principio de protección.** Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;
- II. **Principio de necesidad y proporcionalidad.** Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;
- III. **Principio de confidencialidad.** Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, y
- IV. **Principio de oportunidad y eficacia.** Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, el personal servidor público estatal o municipal que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con las personas responsables de la comisión del delito o con una tercera persona implicada que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

Artículo 39. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.

CAPÍTULO V MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 40. Las autoridades estatales y municipales brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen



derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica en términos del título correspondiente.

Artículo 41. La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionistas con conocimientos de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.

TÍTULO CUARTO MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Estatal de Víctimas a que hace referencia esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidas en la presente Ley.

Artículo 43. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las dependencias, entidades y organismos del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad, migrantes, indígenas, defensoras de derechos humanos, periodistas y en situación de desplazamiento interno.

Artículo 44. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas estatales y municipales a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno, con independencia de su capacidad socio-económica, y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.



Artículo 45. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno.

La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 46. Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación de manera que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.

Artículo 47. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.

Artículo 48. El Estado a través de sus organismos descentralizados y de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijas e hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley de Educación aplicable.

Artículo 49. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o sus dependientes que lo requieran.

Artículo 50. El Gobierno de Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas,



los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 51. La víctima, sus hijas o hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione.

Artículo 52. El Gobierno de Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

CAPÍTULO II MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO

Artículo 53. Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.

Artículo 54. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de derechos humanos.

Artículo 55. El Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 56. Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.

Artículo 57. Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.

**CAPÍTULO III
MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

Artículo 58. Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:

- I. La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de víctima, y
- II. La asistencia a la víctima en todas las etapas del proceso penal.

Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la víctima la Asesora o Asesor Jurídico.

**TÍTULO QUINTO
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL****CAPÍTULO I
MEDIDAS DE RESTITUCIÓN**

Artículo 59. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.

Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

- I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;
- II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;
- III. Restablecimiento de la identidad;
- IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;
- V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;
- VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;
- VII. Reintegración en el empleo, y

- VIII.** Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, la persona juzgadora podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.

CAPÍTULO II MEDIDAS DE REHABILITACIÓN

Artículo 60. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:

- I.** Atención médica, terapia física, atención psicológica y psiquiátrica especializadas;
- II.** Servicios y asesoría jurídicos tendentes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;
- III.** Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana;
- IV.** Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;
- V.** Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y
- VI.** Todas aquellas medidas tendentes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

Artículo 61. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a las niñas y niños víctimas, a las hijas e hijos de las víctimas y a las personas adultas mayores dependientes de éstas.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

Artículo 62. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 66 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

- I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
- II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiéndose por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;
- III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
- IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;
- V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;
- VI. El pago de los gastos y costas judiciales de la Asesora y Asesor Jurídico cuando éste sea privado;
- VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y
- VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.



Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 66 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 65 de este ordenamiento.

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con las medidas de ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva, expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 63. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

- I. Un órgano jurisdiccional nacional;
- II. Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;
- III. Un organismo público de protección de los derechos humanos, y
- IV. Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.

En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 65.

Artículo 64. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo de la persona sentenciada, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de ésta, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados a la persona sentenciada.

Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley.

Artículo 65. La Comisión Ejecutiva con cargo al Fondo determinarán el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria, en términos de la presente Ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

- I. La determinación del Ministerio Público cuando la persona responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;
- II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial; y
- III. La gravedad del daño sufrido.

La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Para el caso de violaciones graves a derechos humanos, el monto de la compensación subsidiaria o reparación del daño deberá ser cubierto por la autoridad que haya sido declarada responsable, y sólo en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley, la Comisión Ejecutiva con cargo a los recursos del Fondo, podrá cubrirla, la cual será proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

Artículo 66. El Estado a través de la Comisión Ejecutiva podrá compensar de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su

integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:

- I. Las constancias de la o el agente del Ministerio Público que compete de la que se desprenda que las circunstancias del caso hacen imposible la consignación de la persona presunta delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;
- II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que la persona sentenciada no tuvo la capacidad de reparar, y
- III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.

Artículo 68. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá por la Comisión Ejecutiva con cargo al Fondo, en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 69. El Estado a través de la Comisión Ejecutiva, tendrá la obligación de exigir que la persona sentenciada, la autoridad responsable o personal al servicio público del orden estatal o municipal, restituyan a la Comisión Ejecutiva para el Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito o violaciones a derechos humanos que aquél o aquellos cometieron.

Artículo 70. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

CAPÍTULO IV MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

Artículo 71. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

- I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de las y los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;
- II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
- III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
- IV. Una disculpa pública de parte del Estado, las personas autoras y otras involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades de conformidad a los lineamientos que se establezcan para dicho efecto;
- V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos, y
- VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

CAPÍTULO V MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

Artículo 72. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:

- I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;
- II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos que se ajusten a las normas nacional e internacionales relativas a la competencia,



TLAXCALA

independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;

- III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;
- IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de sus dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;
- V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad del personal militar, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;
- VI. La protección de profesionales del derecho, la salud y la información;
- VII. La protección de personas defensoras de los derechos humanos;
- VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
- IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por las y los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;
- X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y
- XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.

Artículo 73. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes:



- I. Supervisión de la autoridad;
- II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro inminente para la víctima;
- III. Caución de no ofender;
- IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y
- V. La asistencia a tratamiento de deshabitación o desintoxicación dictada por una persona juzgadora y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante.

Artículo 74. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de las personas sentenciadas, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.

Artículo 75. La persona juzgadora en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si la persona acusada violase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a la víctima. Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.

Artículo 76. Cuando la persona haya sido sentenciada por delitos o violación a los derechos humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si la persona juzgadora así lo ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabitación o desintoxicación.

TÍTULO SEXTO SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

CAPÍTULO I CREACIÓN Y OBJETO



Artículo 77. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos estatal y municipal.

El Sistema Estatal de Atención a Víctimas está constituido por todas las dependencias y entidades públicas estatales y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva, quien conocerá y resolverá los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

La Comisión de Víctimas tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por personal del servicio público del orden estatal o municipal.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva en el ámbito de su competencia, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

Artículo 78. El Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.

Artículo 79. El Sistema para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

TLAXCALA

- I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas estatales y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;
- II. Formular propuestas para la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;
- III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
- IV. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;
- V. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
- VI. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de las instituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- VII. Promover una estrategia de supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional y la especialización conjunta de miembros de las instituciones de atención a víctimas;
- VIII. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;
- IX. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;
- X. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimas del delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;



TLAXCALA

- XI. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;
- XII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas;
- XIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;
- XIV. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;
- XV. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
- XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos; y
- XVII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Artículo 80. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados:

- I. Poder Ejecutivo:
 - a) La persona titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá;
 - b) La persona titular de la Secretaría de Gobierno;
 - c) La persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado;
 - d) La persona titular de la Secretaría de Salud;
 - e) La persona titular de la Secretaría de Finanzas;
 - f) La persona titular de la Secretaría de Educación Pública;
 - g) La persona titular de la Secretaría del Bienestar;
 - h) La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana;



TLAXCALA

- i) La persona titular del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia;
e
 - j) La persona titular del Instituto Estatal de la Mujer.
- II. Poder Legislativo: por conducto de la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado;
 - III. Poder Judicial: por conducto de la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
 - IV. Organismos Públicos: por conducto de la persona titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y
 - V. La persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala.

Artículo 81. Quienes integren el Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidencia, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Las personas integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.

El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más una de sus personas integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de las personas presentes con derecho a voto.

Corresponderá a la Presidencia del Sistema la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Las personas integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

La persona que preside el Sistema será suplida en sus ausencias por la persona titular de la Secretaría de Gobierno. Quienes integren el Sistema deberán asistir personalmente.

Tendrán el carácter de personas invitadas a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o



sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo de la persona titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Las personas invitadas acudirán a las reuniones con derecho a voz, pero sin voto.

CAPITULO III ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA ESTATAL

Artículo 82. La Comisión Ejecutiva es un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos del Estado.

Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva, serán determinadas por la persona titular de la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en el municipio de Tlaxcala, y podrá establecer oficinas regionales en el Estado, con el objetivo de garantizar una atención pronta y expedita a las víctimas y ofendidos del delito.

En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

De la Comisión Ejecutiva dependerá la Asesoría Jurídica, el Registro y el Fondo, en términos de esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno del Estado contará con un área responsable de efectuar los pagos a las víctimas por

concepto de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 83. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integrará con:

- I. Los recursos que le asigne el Congreso del Estado, a través del Presupuesto de Egresos;
- II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; y
- III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva contará con una Junta de Gobierno y una persona titular denominada Comisionada o Comisionado Ejecutivo para su administración.

Artículo 85. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:

- I. Las personas titulares de las dependencias siguientes:
 - a) Secretaría de Gobierno quien la presidirá;
 - b) Secretaría de Finanzas;
 - c) Secretaría de Educación Pública;
 - d) Secretaría de Salud;
 - e) Procuraduría General de Justicia;
 - f) Secretaría de Seguridad Ciudadana;
 - g) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, e
 - h) Secretaría de Bienestar.

II. La persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica que recaerá en la Persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Los cargos de las personas integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva serán honoríficos, por lo que sus integrantes no percibirán remuneración alguna por su desempeño, a excepción de la persona designada como titular de la Comisión Ejecutiva.

Las personas integrantes deberán designar a sus suplentes quienes tendrán facultad de toma de decisiones, así como, derecho a voz y voto siempre y cuando no se encuentren ambos reunidos en la misma sesión. En la integración de la Junta de Gobierno se garantizará en todo momento el principio de paridad de género.

Artículo 86. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidencia, la persona titular de la Comisión Ejecutiva o las dos terceras partes de sus integrantes.

Artículo 87. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes.

Artículo 88. La Junta de Gobierno tendrá exclusivamente las siguientes atribuciones:

- I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente la persona Comisionada Ejecutiva;
- II. Aprobar las disposiciones normativas que la persona Comisionada Ejecutiva someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;
- III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga la persona Comisionada Ejecutiva;
- IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión Ejecutiva de acuerdo con esta Ley, y
- V. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.



En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de las medidas de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas.

Artículo 89. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de una Comisionada o un Comisionado Ejecutivo, el cual será nombrado y removido por la persona titular del Poder Ejecutivo.

Artículo 90. Para ser titular de la Comisión Ejecutiva se requiere:

- I. Contar con ciudadanía mexicana;
- II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su designación;
- III. Contar con título profesional, y
- IV. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección de la o el Comisionado Ejecutivo, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

La persona titular de la Comisión Ejecutiva se desempeñará en su cargo por seis años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 91. La persona titular de la Comisión Ejecutiva para el desarrollo de las actividades designará a las personas responsables de la Asesoría Jurídica, el Registro y el área responsable de efectuar los pagos que correspondan a las víctimas por concepto de medidas de ayuda, asistencia, reparación integral y compensación.

Artículo 92. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Bajo un esquema de colaboración y coordinación ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Estatal;



TLAXCALA

- II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;
- III. Elaborar anualmente el proyecto de Programa con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;
- IV. Proponer al Sistema políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas del delito u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
- V. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema;
- VI. Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;
- VII. Proponer al Sistema las medidas previstas en la presente Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo;
- VIII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;
- IX. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;
- X. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de las personas servidoras públicas o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
- XI. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Estatal de Víctimas y de la Asesoría Jurídica;

TLAXCALA

- XII.** Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Estatal de Víctimas. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;
- XIII.** Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley;
- XIV.** Vigilar el adecuado ejercicio de su presupuesto a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;
- XV.** Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos al Fondo; el área responsable de efectuar los pagos que corresponda a las víctimas por concepto de medidas de ayuda, asistencia, reparación integral y compensación
- XVI.** Elaborar anualmente las tabulaciones relacionados con montos compensatorios, medidas de ayuda y asistencia en los términos de esta ley y su reglamento;
- XVII.** Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;
- XVIII.** Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;
- XIX.** Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley, sus reformas y adiciones;
- XX.** Formular propuestas de política integral estatal de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
- XXI.** Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención, asistencia y protección de las víctimas, que permitan su recuperación y

TLAXCALA

restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

- XXII.** Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema, así como los comités, cuidando la debida representación de sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;
- XXIII.** Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;
- XXIV.** Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;
- XXV.** Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos estatal y municipal;
- XXVI.** Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;
- XXVII.** Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;

XXVIII.

Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos.

La autoridad estatal y las municipales deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para las víctimas;

XXIX.

Proponer al Sistema en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso o justicia, a la verdad y reparación integral;

XXX.

Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas concretas que enfrenten las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

XXXI.

Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva.

Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios que correspondan al Sistema;

XXXII.

Brindar apoyo de acuerdo a sus políticas y estrategias viables, sustentables y de alcance definido conforme a los recursos presupuestales con los que cuente, a favor de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación conforme al Reglamento;

XXXIII.

Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser

TLAXCALA

permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, emitirán recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

- XXXIV. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Estatal;
- XXXV. Hacer públicos los informes anuales sobre el funcionamiento de la Asesoría Jurídica y del área responsable de efectuar los pagos que corresponda a las víctimas por concepto de medidas de ayuda, asistencia, reparación integral y compensación, así como sobre el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia; y
- XXXVI. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable.

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por las autoridades responsables o personas al servicio público del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos:

- I. Cuando carezcan de fondos o presupuesto suficiente;
- II. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por la Ley o autoridad competente;
- III. Cuando exista una resolución por parte de algún organismo internacional, jurisdiccional o no jurisdiccional, de protección de derechos humanos, cuya competencia derive de un tratado en el que el Estado mexicano sea parte o bien del reconocimiento expreso de competencia formulado por éste; y
- IV. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de la víctima.

La Comisión Ejecutiva podrá valorar estos casos, de oficio, o a petición de la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos, la autoridad ministerial o jurisdiccional correspondiente, o bien de las víctimas o sus representantes. La

TLAXCALA

determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas.

Los recursos erogados bajo este supuesto deberán ser reintegrados a la Comisión Ejecutiva, con cargo al Fondo, por las autoridades responsables con cargo a sus presupuestos o personas al servicio público del orden estatal o municipal conforme a la normatividad reglamentaria que para tal efecto se expida.

Artículo 94. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con entidades e instituciones federales, así como con entidades e instituciones homologas de las entidades federativas, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 95. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los poderes ejecutivo y legislativo, los municipios, o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las víctimas.

Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta de la persona titular, cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas.

Artículo 96. Los diagnósticos que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como feminicidio, violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.

Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.

La Comisión Ejecutiva podrá también contar con la asesoría de grupos de personas expertas en temas específicos, solicitar opiniones de organismos estatales, nacionales o internacionales públicos de derechos humanos, instituciones u organizaciones públicas o privadas nacionales o extranjeras con amplia experiencia en cierta problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia; verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos destinados para tal efecto deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil.

Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.

Artículo 97. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:

- I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a las medidas de ayuda y asistencia para su otorgamiento;
- II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la presente Ley y el Reglamento;
- III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y
- IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 98. La persona titular de la Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva;
- II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno;
- III. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva;
- IV. Notificar a las y los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;

TLAXCALA

- V. Coordinar las funciones del Registro Estatal de Víctimas, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho registro;
- VI. Rendir cuentas a la persona titular del Poder Ejecutivo cuando sea requerida, sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva y a las áreas que la integran;
- VII. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva;
- VIII. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones;
- IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de personas expertas que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;
- X. Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que corresponda a la Comisión Ejecutiva;
- XI. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada;
- XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva;
- XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, las medidas de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas;
- XIV. Nombrar a las personas titulares de Asesoría Jurídica, del Registro y de la área responsable de efectuar los pagos que correspondan a las víctimas por concepto de medidas de ayuda, asistencia, reparación integral y compensación;



TLAXCALA

- XV. Las establecidas en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, y
- XVI. Las demás que se requieran en términos de la legislación aplicable para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

CAPÍTULO IV REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS

Artículo 99. El Registro es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.

El Registro Estatal de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

El Registro es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel estatal, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

La o el Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Estatal de Víctimas.

Las y los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Estatal de Víctimas.

Artículo 100. El Registro Estatal de Víctimas será integrado por:

- I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva;
- II. Las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades y particulares señalados en esta Ley, como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del delito o de violación de derechos humanos al Sistema, y

TLAXCALA

- III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal o municipal, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

Artículo 101. Las solicitudes de ingreso de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden local se realizarán en forma totalmente gratuita, ante la Comisión Ejecutiva.

La información que acompaña la incorporación de datos al registro se consignará en el formato único de registro, diseñado por la Comisión Ejecutiva y su utilización será obligatoria por parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El formato único de registro deberá ser accesible a toda persona y de uso simplificado y buscará recoger la información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.

La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente.

El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva, conforme a lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 102. Para que las autoridades competentes, procedan a la inscripción de datos de la víctima en el Registro se deberá, como mínimo, tener la siguiente información:

TLAXCALA

- I. Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita el ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos. En caso de que se cuente con ella, se deberá mostrar una identificación oficial;
- II. En su caso, el nombre completo, cargo y firma de la persona servidora pública de la entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al Registro y el sello de la dependencia;
- III. La firma y huella dactilar de la persona que solicita el Registro; en los casos que la persona manifieste no poder o no saber firmar, se tomará como válida la huella dactilar;
- IV. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes;
- V. La o el funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida;
- VI. Los datos de contacto de la persona que solicita el registro, y
- VII. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite una servidora o servidor público deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece.

En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva pedirá a la entidad que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al Registro Estatal o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.

Artículo 103. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al Registro Estatal de Víctimas:

- I. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa;

TLAXCALA

- II. Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de registro diseñado por la Comisión Ejecutiva;
- III. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva determine;
- IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva;
- V. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;
- VI. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en esta Ley;
- VII. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;
- VIII. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por la persona declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración;
- IX. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a la Protección de Datos Personales;
- X. Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud, y
- XI. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva.

Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a que se refiere la presente Ley.

Artículo 104. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida, junto con la documentación remitida que acompañe el formato único de registro.

Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades del orden local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

- I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente;
- II. Exista una determinación de la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;
- III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;
- IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y
- V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.

Artículo 105. La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea una tercera persona

quien solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo.

Artículo 106. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro cuando, después de realizada la valoración, haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la presente ley.

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse, o a quien haya solicitado la inscripción con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la Comisión Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley.

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al correo electrónico, o al medio que designe para recibir notificaciones, que figuren en el Formato Único de Registro o en los demás sistemas de información a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

Artículo 107. La información sistematizada en el Registro Estatal de Víctimas incluirá:

- I. El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el Formato Único de Registro. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos;
- II. La descripción del daño sufrido;
- III. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;
- IV. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;

- V. La identificación de la persona o entidad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente;
- VI. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;
- VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima, y
- VIII. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima.

La información que se asiente en el Registro deberá garantizar que se respete el enfoque diferencial.

Artículo 108. La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el Registro garantizarán la implementación de este plan en los respectivos órdenes estatal y municipal.

CAPÍTULO V INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO

Artículo 109. El ingreso de la víctima al Registro se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Artículo 110. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima, estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de registro. El Ministerio Público, personas defensoras públicas, asesoras jurídicas de las víctimas y las comisiones de derechos humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración.

Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad

federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán la obligación de recibirla, entre las cuales, en forma enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes:

- I. Embajadas y consulados de México en el extranjero;
- II. Instituciones de salud y educación, sean públicas o privadas;
- III. Instituto de Mujeres;
- IV. Albergues;
- V. Defensoría Pública, y
- VI. Síndica o Síndico municipal.

Artículo 111. Una vez recibida la denuncia, queja o noticia de hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de setenta y dos horas, dicho término podrá duplicarse, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la presente ley.

En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de readaptación social.

Cuando una persona servidora pública, en especial las que tienen la obligación de tomar la denuncia de la víctima sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos, como: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato.

Artículo 112. Cualquier autoridad, así como particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro, aportando con ello los elementos que tenga.

Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al registro por sí misma o a través de sus representantes.

En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en esta Ley.

Artículo 113. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes:

- I. La persona juzgadora penal, mediante sentencia ejecutoriada;
- II. La persona juzgadora penal que tiene conocimiento de la causa;
- III. La persona juzgadora en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que la persona es víctima;
- IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
- V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;
- VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
- VII. La Comisión Ejecutiva, y
- VIII. El Ministerio Público.

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a las medidas de ayuda y asistencia, a la reparación integral y a la compensación, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.

Artículo 114. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

- I. El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y
- II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que la persona juzgadora de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven,

TLAXCALA

en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a las medidas de ayuda, asistencia o a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente.

Artículo 115. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas garantizará los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los extranjeros que hayan sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en México, firmando los convenios de colaboración correspondientes con las autoridades competentes del país donde la víctima retorne y con apoyo de los consulados mexicanos en dicho país.

TÍTULO SÉPTIMO DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 116. Los distintos órdenes de gobierno, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

CAPÍTULO I ESTADO

Artículo 117. Corresponde al Gobierno del Estado:

- I. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas;
- II. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;
- III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;
- IV. Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos internacionales aplicables;
- V. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la presente Ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el

TLAXCALA

presente ordenamiento legal, asimismo, participar en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas;

- VI.** Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa;
- VII.** Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;
- VIII.** Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;
- IX.** Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las víctimas indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación;
- X.** Realizar a través de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y demás instituciones estatales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;
- XI.** Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas para facilitar la actuación de la Comisión Ejecutiva;
- XII.** Rendir ante el Sistema Nacional de Víctimas un informe anual sobre los avances del Programa;
- XIII.** Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;
- XIV.** Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas;
- XV.** Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

- XVI.** Garantizar que los derechos de las víctimas y la protección de las mismas sean atendidos de forma preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias;
- XVII.** Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con base en resultados medibles;
- XVIII.** Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y
- XIX.** Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 118. Corresponde al Gobierno Estatal en materia de coordinación interinstitucional:

- I.** Instrumentar las medidas necesarias para prevenir violaciones de los derechos de las víctimas;
- II.** Diseñar la política integral con un enfoque transversal de género para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas;
- III.** Elaborar el Programa en coordinación con el Sistema;
- IV.** Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los distintos órdenes de gobierno en materia de reparación integral, no repetición, ayuda y asistencia de las víctimas;
- V.** Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
- VI.** Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;
- VII.** Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas que así lo requieran;
- VIII.** Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas;

TLAXCALA

- IX. Realizar un diagnóstico estatal y otros estudios complementarios de manera periódica sobre las víctimas en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, ayuda y protección de las víctimas;
- X. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta Ley;
- XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
- XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 119. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

- I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas, líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos;
- II. Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;
- III. Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección especializada;
- IV. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos establecidos en la presente Ley;
- V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, indígenas, personas adultas mayores, dentro y fuera del seno familiar;
- VI. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos

TLAXCALA

de prevención y atención a las víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;

- VII.** Definir y promover al interior de cada institución políticas que promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas;
- VIII.** Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a derechos humanos, y en el caso de nacionales que se encuentren en el extranjero, se deberán establecer los mecanismos de información para que conozcan a dónde acudir en caso de encontrarse en calidad de víctimas;
- IX.** Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones a derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por la misma;
- X.** Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;
- XI.** Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva, en términos de esta Ley, y
- XII.** Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

En materia educativa, las autoridades competentes establecerán un programa de becas permanente para el caso de las víctimas directas e indirectas que se encuentren cursando los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas, con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios. Estos apoyos continuarán hasta el término de su educación superior.

En los casos en que la víctima esté cursando sus estudios en una institución privada, el apoyo se brindará hasta la conclusión del ciclo escolar en curso.

Las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria brindarán atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que en la prestación de los servicios se respeten sus derechos humanos.

Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de algún delito o violación a sus derechos humanos.

CAPÍTULO II ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 120. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Gobierno del Estado:

- I. Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos;
- II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala y demás ordenamientos aplicables;
- III. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia;
- IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;
- V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;
- VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;
- VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y garantizar la seguridad de quienes denuncian;
- VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y
- IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley y las normas reglamentarias aplicables.

**CAPÍTULO III
MUNICIPIOS**

Artículo 121. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes en la materia, las atribuciones siguientes:

- I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas;
- II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y el Estado, en la adopción y consolidación de Sistema;
- III. Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;
- IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;
- V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para las personas imputadas;
- VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
- VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;
- VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
- IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.

**CAPÍTULO IV
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS**

Artículo 122. Todas las personas servidoras públicas, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes deberes:

- I. Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan;



TLAXCALA

- II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en cumplimiento de los principios establecidos en la presente Ley;
- III. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos;
- IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;
- V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y al conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;
- VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los términos de la presente Ley;
- VII. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la presente Ley;
- VIII. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las visas;
- IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley;
- X. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación oficial deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su representante, formuló o entregó la misma;
- XI. Ingresar a la víctima al Registro, cuando así lo imponga su competencia;
- XII. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con

TLAXCALA

la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;

- XIII.** Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de las víctimas;
- XIV.** Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía, así como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;
- XV.** Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas, cadáveres o restos encontrados;
- XVI.** Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificarlos y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y comunidad;
- XVII.** Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada;
- XVIII.** Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones a derechos humanos;
- XIX.** Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole, y
- XX.** Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para las personas servidoras públicas, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente.



Artículo 123. Toda persona particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de concesión, permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeta a los deberes antes detallados, con los alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima en cumplimiento de las medidas a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de esta Ley.

Artículo 124. Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico. Ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que se generen.

CAPÍTULO V MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 125. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:

- I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;
- II. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;
- III. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos;
- IV. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;
- V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;
- VI. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;



TLAXCALA

- VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;
- VIII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;
- IX. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso;
- X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y
- XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

CAPÍTULO VI PERSONAS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

Artículo 126. Corresponde a las personas integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia:

- I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados internacionales;
- II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;
- III. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;
- IV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellas se presenten;
- V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y sus bienes jurídicos;

TLAXCALA

- VI. Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad;
- VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;
- VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;
- IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses;
- X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y
- XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención a víctimas de delito y reparación integral.

CAPÍTULO VII ASESORA JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS

Artículo 127. Corresponde a la persona Asesora Jurídica de las Víctimas:

- I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;
- II. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley;
- III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;

TLAXCALA

- IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;
- V. Formular denuncias o querellas, y
- VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.

Artículo 128. La Asesoría Jurídica se integrará por quienes ejercen la abogacía, peritos, y personas profesionales y técnicas de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO VIII PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 129. Además de los deberes establecidos para toda persona servidora pública, las personas funcionarias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el ámbito de su competencia, deberán:

- I. Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;
- II. Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las mismas al Ministerio Público;
- III. Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos;
- IV. Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para documentación de casos de presuntas violaciones de derechos humanos;
- V. Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o bienes jurídicos;
- VI. Dar seguimiento a las solicitudes que planteé ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso de advertir omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por las vías pertinentes;
- VII. Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que, de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las responsabilidades

TLAXCALA

administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos humanos, y

- VIII.** Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en la presente Ley.

CAPÍTULO IX PERSONAL POLICIACO

Artículo 130. Además de los deberes establecidos para toda persona servidora pública, y las disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, al personal policiaco de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les corresponde:

- I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;
- II. Permitir la participación de la víctima y su asesora o asesor jurídico en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;
- III. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad;
- IV. Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;
- V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con los principios establecidos en la presente Ley;
- VI. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos, y
- VII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su competencia.

**CAPÍTULO X
DE LA VÍCTIMA**

Artículo 131. A la víctima corresponde:

- I. Actuar de buena fe;
- II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos;
- III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellas entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se determine necesario, y
- IV. Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma.

En caso de no dar cumplimiento a estas, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 132. Toda persona empleadora de una víctima, sea pública o privada, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.

**TÍTULO OCTAVO
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS
VÍCTIMAS****CAPÍTULO I
OBJETO E INTEGRACIÓN**

Artículo 133. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para otorgar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que otorgue la Comisión Ejecutiva con cargo al Fondo en los

términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

Artículo 134. Para ser beneficiarias o beneficiarios de las medidas de ayuda, asistencia, o reparación integral, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.

Artículo 135. El Fondo se integrará por:

- I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala del ejercicio fiscal del año correspondiente, conforme a los principios de progresividad y máximo uso de recursos, sin que pueda disponerse de éstos para fines diversos a los señalados por esta Ley;
- II. Las aportaciones que, a manera de donaciones en efectivo, hagan los particulares, las instituciones públicas, privadas o sociales, nacionales o extranjeras de manera altruista mediante los procedimientos respectivos;
- III. El producto de la enajenación y los rendimientos de los bienes que sean decomisados o asegurados en los procedimientos penales o aquellos que causen abandono, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en la legislación respectiva;
- IV. El producto de la enajenación y los rendimientos de los bienes que sean extinguidos, en la proporción que corresponda, en los términos de la legislación correspondiente;
- V. Recursos provenientes de las multas, fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, salvo lo contemplado en el artículo 13 de la presente Ley;
- VI. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley;

TLAXCALA

- VII. El monto de la reparación del daño, en aquellos casos en que la víctima renuncie a ella, no se encuentren identificados o no la exijan dentro del plazo de tres meses, en los términos que señala el Código Penal;
- VIII. Los recursos depositados como pago de reparación del daño, que no hayan sido ejercidos, en los términos de las leyes aplicables en materia de extinción de dominio;
- IX. Ingresos derivados de la recuperación de recursos asignados a la víctima con motivo de la reparación de daños realizada por la persona responsable, la compañía aseguradora o afianzadora;
- X. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo; y
- XI. Las demás aportaciones tendientes a incrementar la capacidad económica del Fondo.

Los montos referidos en las fracciones anteriores, se integrarán anualmente y se acumularán en el Fondo en cada ejercicio fiscal. El ejercicio de los recursos se podrá realizar a partir de que las cantidades se integren a su patrimonio y hasta su asignación en cualquier momento por la Comisión Ejecutiva en los términos de la Ley.

La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 136. Para ser persona beneficiaria del apoyo del Fondo, deberá tomarse en cuenta el tipo de medida que en cada caso se requiera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y la normatividad que de ella emane.

Artículo 137. Los recursos del Fondo se aplicarán para otorgar las medidas de ayuda, asistencia o reparación integral, en los términos de la Ley General, la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Se deberá de entregar la indemnización o compensación que corresponda otorgar a la víctima, en los términos dispuestos por la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 138. No se otorgará apoyo económico a cargo del Fondo cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes:

- I. Cuando el hecho victimizante haya ocurrido fuera del Estado de Tlaxcala y no haya tenido efectos dentro del mismo;
- II. Cuando cambie la situación jurídica de la persona y pierda, como consecuencia de ello, la calidad de víctima;
- III. Cuando ya haya sido reparado el daño sufrido y sólo cuando el apoyo económico tenga por objeto cubrir la compensación subsidiaria; y
- IV. En materia penal, cuando haya concluido el procedimiento mediante la celebración de un acuerdo reparatorio o a través de la suspensión condicional del procedimiento y sólo cuando el apoyo económico tenga por objeto cubrir la compensación subsidiaria.

Artículo 139. Habrá impedimento para obtener apoyo económico en cualquiera de los siguientes casos:

- I. Cuando la persona haya proporcionado información falsa a la Comisión Ejecutiva, al Sistema, al Ministerio Público, a los Organismos Públicos de defensa de Derechos Humanos y a cualquier otra institución, pública o privada, encargada de prestar los servicios de atención a los que refiere la presente Ley, con el objeto de adquirir la calidad de víctima; y
- II. Cuando existan dos o más solicitudes de apoyo formuladas por la misma persona en la que además haya identidad en cuanto al hecho victimizante, agente y daño.

El impedimento para la obtención del apoyo económico en el caso descrito en la fracción I del presente artículo se decretará sin perjuicio de la responsabilidad penal, administrativa, civil o de cualquier otra índole que el hecho genere. Además, la persona que haya incurrido en dicho supuesto está obligada a restituir el equivalente a la cantidad del apoyo económico que le fue otorgado a cargo del Fondo, para lo cual éste ejercerá todas las acciones legales que sirvan para tales efectos.

CAPÍTULO II ADMINISTRACIÓN

Artículo 140. La Comisión Ejecutiva administrará directamente al Fondo para dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ley y el Reglamento, observando en todo momento los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que se refiere los Títulos Tercero y Cuarto de la presente Ley. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.

Artículo 141. La Comisión Ejecutiva determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima incluida la medida de compensación, previa opinión que al respecto emita el Comité interdisciplinario evaluador, en términos de la presente Ley y el Reglamento.

Artículo 142. Las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que se otorguen al amparo de esta Ley y del Reglamento, serán fiscalizados anualmente por el Órgano de Fiscalización Superior.

Artículo 143. El Estado se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo al presupuesto de la Comisión Ejecutiva para dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ley y el Reglamento. Dichos recursos deberán enterarse al Fondo, mismos que serán utilizados para continuar otorgando la compensación prevista en el Título Quinto del presente ordenamiento.

Para tal efecto, se aportarán al Estado los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.

El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por la persona juzgadora al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor del Estado en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.

Artículo 144. El Estado ejercerá el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la



vía civil, para cobrar la reparación del daño de la persona sentenciada o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 145. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO

Artículo 146. Para acceder a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento.

La determinación de la Comisión Ejecutiva respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas.

Artículo 147. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación de la persona Comisionada Ejecutiva en torno a las medidas de ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima.

Artículo 148. El Comité Interdisciplinario evaluador deberá integrar dicho expediente, el cual deberá contener como mínimo:

- I. Los documentos presentados por la víctima;
- II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;
- III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y
- IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos.

Artículo 149. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además:

- I. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que

TLAXCALA

enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;

- II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación;
- III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y
- IV. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité lograr la integración de la carpeta respectiva.

Artículo 150. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del comité interdisciplinario evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso.

El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda.

La Comisión Ejecutiva deberá integrar el expediente completo y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud.

Artículo 151. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima acredite:

- I. Contar con sentencia ejecutoriada en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar u otras formas de reparación;
- II. No haber alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;
- III. No haber recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio de la persona juzgadora de la causa judicial o con otro medio fehaciente;

TLAXCALA

- IV. Presentar solicitud de ayuda, asistencia o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea validada por la Comisión Ejecutiva; y
- V. Haber agotado los recursos y procedimientos legales para obtener de la persona sentenciada el pago de los conceptos a que ha sido condenada y sin haber logrado el pago total.

Artículo 152. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:

- I. La condición socioeconómica de la víctima;
- II. La naturaleza del hecho victimizante y los daños en la esfera jurídica de la víctima;
- III. La repercusión del daño en la vida familiar;
- IV. La imposibilidad de obtener un ingreso lícito;
- V. El número y la edad de dependientes económicos,
- VI. El enfoque diferencial; y
- VII. Los recursos disponibles en el Fondo.

CAPÍTULO IV DE LA REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 153. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de compensación, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

Artículo 154. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo estatal, nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, esta Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señala esta Ley.

Artículo 155. Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la indemnización.

Artículo 156. Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad subsidiaria frente a la víctima, y se distribuirá el monto del pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 157. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.

Artículo 158. La Comisión Ejecutiva tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales federales, estatales o municipales con que se cuente.

Artículo 159. Cuando proceda el pago de la reparación integral, se registrará el fallo judicial que lo motivó y el monto de la indemnización, mismos que estarán disponibles para su consulta pública.

TÍTULO NOVENO

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

Artículo 160. Las personas integrantes del Sistema que tengan contacto con la víctima en cumplimiento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán incluir dentro de sus programas contenidos temáticos con perspectiva de género sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por esta Ley; así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

Dichas entidades deberán diseñar e implementar un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichas servidoras y servidores, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.

Artículo 161. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de personas al servicio público que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimiento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a derechos humanos y perspectiva de género.

Artículo 162. Los servicios periciales del Estado deberán capacitar a las personas funcionarias y empleadas con el objeto de que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 163. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización del personal al servicio público ministerial, policial y pericial, del ámbito federal, estatal y municipal deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos mínimos impuestos por el presente capítulo de esta Ley.

Asimismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a las personas servidoras públicas de sus respectivas dependencias.

Las obligaciones enunciadas en el presente artículo rigen también para las entidades homólogas de capacitación, formación, actualización y especialización de los miembros del Poder Judicial y de seguridad pública en los órdenes de gobierno estatal y municipal.

Artículo 164. Las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y Estatal deberán coordinarse con el objeto de cumplir cabalmente las atribuciones a ellas referidas.

Dichas instituciones deberán realizar sus labores prioritariamente enfocadas a que la asistencia, apoyo, asesoramiento y seguimiento sea eficaz y permita un ejercicio real de los derechos de las víctimas.

Artículo 165. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.

La formación y capacitación se realizará con perspectiva de género, enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima.

Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto.

Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. Cuando el Gobierno Estatal no cuente con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberán crear los programas y planes específicos.

TÍTULO DÉCIMO ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 166. Se crea en la Comisión Ejecutiva, la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, área especializada en asesoría jurídica para víctimas con independencia técnica y operativa.

Artículo 167. La Asesoría Jurídica estará integrada por asesoras y asesores jurídicos de atención a víctimas, peritos, personas intérpretes o traductoras lingüísticas y profesionistas técnicas de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.

Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones de asesoras y asesores jurídicos, en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 168. La Asesoría Jurídica tiene a su cargo las siguientes funciones:

TLAXCALA

- I. Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en asuntos del fuero común, a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en esta Ley, en tratados internacionales y demás disposiciones aplicables;
- II. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero común, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral;
- III. Seleccionar y capacitar al personal del servicio público adscritos a la Asesoría Jurídica;
- IV. Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público, por cada Juzgado que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando menos a una Asesora Jurídica y al personal de auxilio necesario;
- V. Celebrar convenios de coordinación con quienes pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas, y
- VI. Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas.

Artículo 169. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva le proporcione una persona Asesora Jurídica en caso de que no quiera o no pueda contratar una abogada o abogado particular, desde el momento de su ingreso al Registro. En este caso, la Comisión Ejecutiva deberá nombrarle una a través de la Asesoría Jurídica, así como una persona intérprete o traductora lingüística cuando la víctima no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.

La víctima tendrá el derecho de que su abogada o abogado comparezca a todos los actos en los que ésta sea requerida, y de contar con una persona intérprete o traductora de su lengua, cuando así se requiera.

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o no pueden contratar a una abogada o abogado particular y en especial a:

- I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;
- II. Las personas jubiladas o pensionadas, así como sus cónyuges;

- III. Personal eventual o subempleado;
- IV. La población indígena;
- V. Personas con discapacidad;
- VI. Niñas, niños, adolescentes, hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y homicidio con violencia, y
- VII. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

Artículo 170. Se crea la figura de Asesora Jurídica de Atención a Víctimas la cual tendrá las funciones siguientes:

- I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;
- II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendentes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos;
- III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;
- IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;
- V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;
- VI. Informar y asesorar a familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables;



TLAXCALA

- VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;
- VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;
- IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de este ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando la Asesora Jurídica de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, y
- X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.

Artículo 171. Para ingresar y permanecer como Asesora Jurídica se requiere:

- I. Ser de ciudadanía mexicana o extranjera con calidad migratoria de inmigrada en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
- II. Contar con licenciatura en derecho, y cédula profesional expedida por la autoridad competente, y
- III. No haber sido condenada por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Artículo 172. La Asesora Jurídica será asignada inmediatamente por la Comisión Ejecutiva, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil.

Artículo 173. La persona titular de la Asesoría Jurídica, las Asesoras Jurídicas y el personal técnico de la Asesoría Jurídica serán consideradas personas al servicio público de confianza.

Artículo 174. La persona titular de la Asesoría Jurídica deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:

- I. Ser de ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

TLAXCALA

- II. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho, legalmente expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación;
- III. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus funciones, y
- IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenada por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta.

La Comisión Ejecutiva procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya desempeñado el cargo de Asesora Jurídica o similar.

Artículo 175. La persona titular de la Asesoría Jurídica tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de Asesoría Jurídica de las Víctimas que se presten, así como sus unidades administrativas;
- II. Conocer de las quejas que se presenten contra las personas que funjan como Asesoras Jurídicas de atención a víctimas y, en su caso, investigar la probable responsabilidad del personal de la Asesoría Jurídica;
- III. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a las Asesoras Jurídicas; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstas o del personal de la Asesoría Jurídica;
- IV. Proponer a la Junta de Gobierno las políticas que estime convenientes para la mayor eficacia de la defensa de los derechos e intereses de las víctimas;
- V. Proponer a la Comisión Ejecutiva, las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a las Asesoras Jurídicas;
- VI. Promover y fortalecer las relaciones de la Asesoría Jurídica con las instituciones públicas, sociales y privadas que, por la naturaleza de sus funciones, puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones y de manera preponderante con la Asesoría Jurídica Federal;

- VII. Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto de Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica, así como un programa de difusión de sus servicios;
- VIII. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todas y cada una de las Asesoras Jurídicas que pertenezcan a la Asesoría Jurídica, el cual deberá ser publicado;
- IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Junta de Gobierno, y
- X. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

Artículo 176. La asesoría jurídica otorgada por la Comisión Ejecutiva cesará únicamente cuando:

- I. La víctima lo solicite expresamente;
- II. La víctima cuente con asesor jurídico particular;
- III. Cambie la situación jurídica de víctima a la de la persona inculpada y sea en el mismo hecho investigado;
- IV. La víctima deje de acudir sin causa justificada, por más de seis meses a su asesoría, acreditándose la falta de interés jurídico, o
- V. Por sentencia absolutoria que haya causado ejecutoria, en la que no se demuestre que existe daño material o moral.

CAPÍTULO II ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS

Artículo 177. La Comisión Ejecutiva, tendrá una Unidad de Atención a Mujeres Víctimas, como un área especializada en brindar atención victimológica a niñas y mujeres, a través de personal femenino sensibilizado y capacitado en derechos humanos y perspectiva de género.

En el Reglamento se determinarán las atribuciones de la Unidad, y demás circunstancias necesarias para su funcionamiento.

Artículo 178. La Unidad tendrá como objeto contener los efectos de la victimización a través de una atención victimológica integral y efectiva, otorgando de manera oportuna asistencia jurídica, médica, psicológica y social, para el restablecimiento de sus derechos humanos de forma segura, confiable y protectora.

Artículo 179. La Unidad deberá llevar un registro estadístico de la atención victimológica otorgada, la cual será registrada en el BANAVIM, con el fin de generar información cuantitativa para el diseño de políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.

Artículo 180. Las servidoras públicas que integren la Unidad deberán:

- I. Ser de ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Contar con título y cédula profesional para el legal y legítimo derecho de su profesión; y
- III. Tener cursos, diplomados y certificaciones que acrediten su conocimiento y habilidades en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año dos mil veinticuatro.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, publicada el tres de mayo de dos mil catorce, Tomo XCIII, Segunda Época, No. Extraordinario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

TERCERO. La persona titular del Poder Ejecutivo por única ocasión deberá designar o ratificar a la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala, cargo que culminará con el cambio de administración del Poder Ejecutivo 2021-2027.

CUARTO. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que se refiere la presente Ley deberá llevar a cabo su primera sesión de instalación dentro de los treinta días naturales posteriores la entrada en vigor de esta Ley.

QUINTO. El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse dentro de los ciento ochenta días hábiles a partir de la entrada en vigor.

SEXTO. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas a que se refiere la presente Ley deberá instalarse dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del Reglamento de la presente Ley.

SÉPTIMO. Los recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, bienes muebles e inmuebles que actualmente administra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos serán transferidos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para su administración, operación, uso y labores.

OCTAVO. Los recursos financieros con los que cuenta el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos destinado a brindar los recursos económicos para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño a víctimas y ofendidos en los términos previstos en la ley, serán administrados por la persona designada como Comisionada Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva en coordinación con la Secretaría de Finanzas llevaran a cabo las adecuaciones necesarias para la debida operación del Fondo.

NOVENO. Todos los convenios y acuerdos signados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos y por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos previo a la entrada en vigor de la presente Ley, mantendrán sus derechos vigentes.

DÉCIMO PRIMERO. En materia de paridad entre géneros se deberá observar el principio de manera progresiva, a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la Ley.

DÉCIMO SEGUNDO. La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles emitirá los lineamientos a los que se refieren la presente Ley.

DÉCIMO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, a los 19 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro.



SUSCRIBEN



Dip. Marcela González
Castillo



Dip. Brenda Cecilia Villantes
Rodríguez



Dip. Jorge Caballero
Román



Dip. Lupita Cuamatzi
Aguayo



Dip. María Guillermina
Loaiza Cortero



Dip. Miguel Ángel Caballero
Yonca



Dip. Rubén Terán Águila



Dip. Vicente Morales Pérez



Dip. José Gilberto Temoltzin
Martínez



Dip. Juan Manuel Cambrón
Soria

Dip. Miguel Ángel Covarrubias
Cervantes



Dip. Mónica Sánchez
Angulo



Dip. Gabriela Esperanza Brito
Jiménez



Dip. Laura Alejandra Ramírez
Ortiz



Dip. Blanca Águila Lima




Dip. Fátima Guadalupe Pérez
Vargas



TLAXCALA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA



Dip. Fabricio Mena Rodríguez



Dip. Jaciel González Herrera



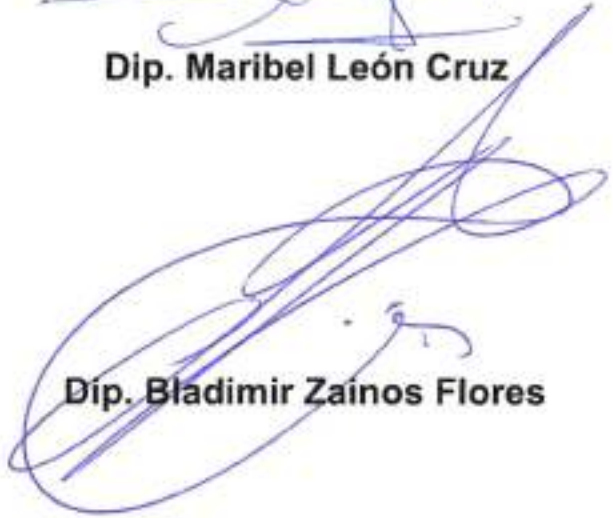
Dip. Diana Torrejón Rodríguez



Dip. Maribel León Cruz



Dip. Ever Alejandro Campech
Avelar



Dip. Bladimir Zainos Flores



Dip. Lenin Calva Pérez



Dip. Reyna Flor Báez Lozano



Dip. Lorena Ruiz García

ÚLTIMA HOJA DE RÚBRICAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE



5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, PARA CREAR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO**; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

**COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS**

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe le fue turnado los expedientes parlamentarios números **LXIV 099/2021**, **LXIV 007/2023** y **LXIV 036/2024**, que contienen sendas iniciativas, cada una con su proyecto de Decreto, por el que **se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de crear la Fiscalía General de Justicia del Estado**, que presentaron, separadamente y en su orden, los diputados **Miguel Ángel Covarrubias Cervantes**, **Juan Manuel Cambrón Soria** y **Fabrizio Mena Rodríguez**, los días ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, veintitrés de enero de la anualidad dos mil veintitrés y once de marzo del año en curso; para su análisis y formulación del dictamen correspondiente.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción II y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTANDO

1. Para motivar su iniciativa, el Diputado **Miguel Ángel Covarrubias Cervantes** expresó, en esencia, lo siguiente:

- *“Fortalecer el estado de derecho, requiere de un sistema de procuración e impartición de justicia vanguardista, eficiente, independiente, respetuoso de los derechos humanos, que garantice el cumplimiento de las leyes, que contribuya a la paz social y la gobernabilidad.”*

- *“... (Con) la reforma político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, ... se modificó el apartado ‘A’ del artículo 102 Constitucional, sentando las bases para una reestructuración del Ministerio Público Federal, compatible con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, constituyéndose como un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de perseguir los delitos del orden federal.”*

- *“A la fecha, la mayor parte de las entidades federativas han realizado sus respectivas reformas constitucionales, que les permiten contar con organismos autónomos encargados de la procuración de justicia, en armonía con las disposiciones federales y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, restando solo los estados de Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.”*

- *“Puede apreciarse, que la autonomía de las fiscalías de justicia trae consigo diversas ventajas, ya que esta reforma no es solo un cambio*

de su denominación, sino que, con la posterior creación de la Ley Orgánica correspondiente, se podrá implementar un cambio sustantivo en las funciones que desempeña el ministerio público en la investigación de los delitos.”

- “Por ello, a través de la presente iniciativa, propongo reformar ... la Constitución Política local, a fin de dar paso a la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que reemplazará a la actual Procuraduría General de Justicia, con el carácter de órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión.”

2. La exposición de motivos de la iniciativa del Diputado **Juan Manuel Cambrón Soria** es, sustancialmente del tenor siguiente:

- “A la fecha, de las treinta y dos entidades federativas, en treinta de ellas se han establecido las Fiscalías Locales; solo dos estados, Baja California Sur y Tlaxcala, siguen en falta; sosteniendo el anquilosado modelo de Procuradurías Estatales.

De las treinta y dos entidades, en cuatro, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Tlaxcala, el Ministerio Público no tiene autonomía, es decir, sigue supeditado administrativa y jerárquicamente al Poder Ejecutivo. A estas cuatro entidades, deben agregarse Tamaulipas y Veracruz, que solo tienen autonomía técnica, ni siquiera autonomía financiera, por lo que formalmente, siguen dependiendo de los Ejecutivos.

En quince de los treinta y dos estados del país, incluido Tlaxcala, el Gobernador en turno es quien propone a la persona titular de la Fiscalía o Procuraduría. En el caso de Campeche y Chihuahua, la designación del titular de la Fiscalía, la hace el Ejecutivo, y el Congreso solo la ratifica, pero si no fuere ratificada, una nueva designación se hace por el Ejecutivo sin mayor trámite.

En las otras quince entidades, siguen un procedimiento similar por el que se designa al Fiscal General de la Federación, es decir, son los Congresos locales los que formulan una lista de aspirantes; integrada por entre 5 a 10 profesionales de derecho, la cual es enviada al Ejecutivo para que de dicha lista elija una terna, que se regresa al Congreso para que éste haga la designación. En el caso del Fiscal General de la República, el Senado formula una lista, que envía al Presidente de la República, quien de dicha lista, escoge una terna que somete al mismo Senado para su votación.

En todos los casos, si los Congresos Locales o el Senado, por la razón que sea, aun reponiendo los procedimientos, no designan un Fiscal, es el titular del Ejecutivo quien hace la designación.

Prácticamente en todos los casos, a excepción de Baja California Sur, Campeche y Chihuahua, dentro del procedimiento de designación, se establecen exámenes a los aspirantes con sinodales y entrevistas con los respectivos Legislativos.

En 10 estados, el periodo de designación para el cargo de Fiscal, es por seis años, aunque en algunos no es explícito el periodo, sino que conlleva el mismo periodo sexenal del Ejecutivo. En 9 entidades, el periodo es para siete años; en otras 10 es por nueve años; en la Ciudad de México el periodo es por cuatro años; Tlaxcala y Veracruz no tienen definido el periodo y también está sujeto al periodo sexenal del Ejecutivo. El Fiscal General de la República es designado para nueve años.”

- “La presente iniciativa, en consecuencia, plantea las siguientes reformas a la Constitución del Estado:

- a)** La creación de la Fiscalía General del Estado como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.*
- b)** El procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía, será con base en una convocatoria, que emitirá el*

Congreso del Estado, para que se obtenga al menos una lista de seis aspirantes, paritaria en cuanto al género; dicha lista será sometida a un procedimiento de evaluación, realizado por un grupo de académicos e investigadores especializados en procuración de justicia, con reconocimiento estatal y/o nacional, quienes seleccionarán una terna, que deberá aprobar al menos el 80% de los créditos, y de la cual el Congreso elegirá a la o el Fiscal con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

- c) Se establece la obligación de designar a las o los titulares de las Fiscalías Especializadas que determina la propia Constitución Local, la Constitución Federal o las Leyes Generales o Locales, aplicando el mismo procedimiento para designar al Fiscal General. Esta forma de designar a las o los titulares de las Fiscalías Especializadas garantizará la capacidad y profesionalización que deben de tener, evitando que su designación se haga por recomendación o amistad.*

Las personas titulares de la Fiscalía General y Fiscalías Especializadas, integrarán el Consejo Técnico de la Fiscalía, encargado, entre otras cosas, de establecer su normativa interna, establecer los planes y programas para el ejercicio de las funciones de la Fiscalía, así como decidir sobre las áreas especializadas que integrarán a la Fiscalía y los procedimientos de designación de los demás servidores públicos, basados en la respectiva Ley de la Fiscalía General del Estado.”

3. Al exponer los motivos de su iniciativa, el Diputado **Fabricio Mena Rodríguez**, en lo que interesa, señaló:

- “De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la transformación de las procuradurías generales de justicia por fiscalías

generales de justicia, no es solo un cambio de denominación, sino un cambio sustantivo en las funciones que desempeña el ministerio público en la investigación de los delitos.”

- *“El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política y electoral, reformando el apartado “A” del artículo 102, dando paso a una transformación sustancial de la procuración de justicia.*

La transformación, sentó las bases para la reestructuración del Ministerio Público Federal, compatible con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, constituyéndose como un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de perseguir los delitos del orden federal, labor que hasta antes de la reforma recaía en la Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal.

Por su parte, el 14 de diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) dando paso a la creación de un nuevo órgano constitucional autónomo, de corte técnico, que tiene como función principal la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.”

- *“Con su creación, la Fiscalía General de la República, vino a sumarse a los órganos constitucionales autónomos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Los órganos constitucionales autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes

tradicionales del Estado, gozando de una independencia propia, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, el texto fundamental detalla su conformación, su finalidad, estableciendo también los requisitos y forma de designación de sus titulares.”

- Con las posteriores reformas, se estableció el mandato de modelos homologados, de tal manera que las Procuradurías de las Entidades Federativas debieran seguir el modelo Federal, dotando en sus respectivas legislaciones de autonomía constitucional a sus Procuradurías y convertirlas en Fiscalías Autónomas.

Las Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas juegan un rol determinante en los sistemas jurídicos estatales, ya que pueden marcar una gran diferencia de la credibilidad que tenga la sociedad respecto de las instituciones, por eso, la autonomía de estos importantes órganos debe ser garantizada desde el texto de la Constitución, pero, además, las leyes secundarias deben adecuarse a dichos criterios, y más importante, los órganos jurisdiccionales también deben ser guardianes de esa autonomía.

Es justo en ese sentido, que la presente reforma Constitucional busca realizar la transición de la actual Procuraduría del Estado de Tlaxcala a una Fiscalía constituida formalmente como este organismo constitucional autónomo de la Entidad a fin de consolidar su verdadera independencia y capacidad de gestión.

Lo anterior, porque es menester que este Congreso atienda las recomendaciones de los organismos internacionales para dotar de verdadera autonomía a las fiscalías generales de justicia en las Entidades Federativas, para que el nuevo sistema de justicia penal de corte oral adversarial funcione bajo los parámetros adecuados, sin sesgos que afecten la certeza y seguridad jurídica de la sociedad.

Se trata de una tendencia que han adoptado la mayoría de las Entidades Federativas en el país, de acuerdo con el Sistema de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, el avance en esta tendencia es claro en virtud que, de las 33 fiscalías generales existentes en México, a 27 se les ha dotado de

autonomía constitucional por parte de 26 Congresos Locales y el Congreso de la Unión, en el caso de la General de la República.

Esta autonomía, debe asumirse con mesura, dados los ejemplos de otras Entidades donde se generaron altas expectativas que han estado lejos de ser satisfechas, entre otras cosas por el hecho de que a pesar de contar con una nueva naturaleza jurídica, estas instituciones conservaron mayormente las estructuras anteriores.

Por ello, la presente reforma de carácter constitucional, si bien contempla la permanencia y continuidad laboral del personal, establece un modelo de transición y un procedimiento en el régimen transitorio, por el que existe un decantamiento de personal a partir de la implementación de acciones de mejora de la gestión pública -actualizaciones, capacitaciones, etc.- por lo que, a diferencia de otras Entidades Federativas, en el caso de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se tendrán como base de permanencia laboral aspectos como la profesionalización y capacitación de su personal,

Asimismo, se contempla una comisión de transición que administre y vigile el presupuesto destinado para estos fines y que de inmediato supervise el procedimiento transicional de funcionamiento y operatividad, siempre con atención a la salvaguarda de los derechos humanos.

Por ello, se considera una asignatura pendiente el impulso de la autonomía de la Fiscalía en el Estado de Tlaxcala, como parte de su plena y armónica incorporación al sistema de procuración de justicia, alineando los contenidos de nuestra Constitución Local a lo que deben ser los componentes de una verdadera instancia ejecutora de acciones que tiendan a la protección y salvaguarda de los intereses primigenios de las y los tlaxcaltecas.”

4. Las iniciativas con proyecto de Decreto de referencia fueron leídas ante el Pleno del Congreso del Estado, en sesiones públicas ordinarias celebrada los días nueve

de noviembre del año dos mil veintiuno, veinticuatro de enero de la anualidad dos mil veintitrés y doce de marzo del año que transcurre y, en las mismas se ordenó turnar cada una de esas proposiciones a esta Comisión, para su análisis y formulación del dictamen correspondiente.

Los turnos de referencia se concretaron mediante oficios sin número, que oportunamente giró el Secretario Parlamentario a la Presidencia de la suscrita Comisión.

Lo anterior fue así, en el entendido de que con las iniciativas de alusión se formaron, sucesivamente y en el orden indicado, los expedientes parlamentarios números **LXIV 099/2021**, **LXIV 007/2023** y **LXIV 036/2024**.

3. Mediante oficios números **I.E.L.009/2022**, fechado y presentado el día veinte de enero del año dos mil veintidós, y **I.E.L./012/2023**, girado el día tres de febrero de la anualidad dos mil veintitrés, presentado en la misma fecha, el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, a través de su titular, emitió opiniones respecto a la procedencia de las iniciativas formuladas, separadamente, por los diputados **Miguel Ángel Covarrubias Cervantes** y **Juan Manuel Cambrón Soria**.

Las opiniones de mérito se toman en consideración en la expresión de los razonamientos que sustentan el sentido de este dictamen y su correspondiente proyecto de resolución.

Con los antecedentes narrados, esta Comisión formula los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. En el artículo 120 párrafo primero de la Constitución Política del Estado se dispone que: **“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban.”**

Como es de verse, en el precepto Constitucional de referencia se prevé el procedimiento, a través del cual el Poder Constituyente Permanente Estatal está en aptitud de reformar o adicionar la Máxima Ley del Estado.

Lo así establecido es de observarse en el asunto que nos ocupa, dado que versa en la pretensión, que obra en tres iniciativas, de reformar y adicionar determinadas porciones normativas a la Constitución Política del Estado.

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, **“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos...”**.

La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que en su fracción II define al Decreto como **“Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos...”**.

III. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala se prevén las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para **“recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”**, así como para **“cumplir**

con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados”; respectivamente.

Específicamente, tratándose de la competencia de la Comisión que suscribe, en el artículo 57 fracción II del Reglamento invocado, se establece que le corresponde conocer “... **De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución...**”.

Por ende, dado que la materia a analizar consiste, precisamente, en tres iniciativas con sendos proyectos de Decreto, tendentes a implementar las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado, a efecto de crear la Fiscalía General de Justicia del Estado, es de concluirse que las suscritas Comisión es **COMPETENTE** para dictaminar al respecto.

IV. A efecto de proveer a las proposiciones contenidas en la iniciativa se razona como sigue:

A. as Iniciativas convergen en la necesidad de adecuar el marco constitucional local, a efecto de armonizar la institución encargada de la procuración de justicia e investigación criminal, a los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el estado mexicano, a fin de superar diversos problemas estructurales y sistémicos; en este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003), en la elaboración del correspondiente diagnóstico del estado de la justicia en México relató lo siguiente:

“La ausencia de un debido proceso en México impide que la sociedad tenga la certeza de que quienes cumplen [sentencias] son responsables de la comisión de un delito. Al mismo tiempo, esta carencia permite que se pueda apresar a las personas por motivos políticos, atribuyéndoles delitos ordinarios”.

“Debe advertirse que es un error considerar como impunidad el hecho de que gran parte de los casos que el ministerio público consigna ante los jueces no se traduzca en sentencias condenatorias, ya que los jueces no tienen por misión condenar, sino hacer justicia” (ONUDH, 2003:11).

Según el diagnóstico, las procuradurías de justicia enfrentaban diversos obstáculos estructurales a la plena realización del derecho al debido proceso. De entre estos obstáculos estructurales, es razonable afirmar que al menos los dos siguientes subsisten en tanto las procuradurías no alcancen un grado importante de autonomía constitucional:

- La falta de una adecuada separación de las fases de investigación e instrucción de los delitos, a fin de que no sea el ministerio público la entidad encargada de investigar e instruir.

- La falta de una adecuada autonomía e independencia de las procuradurías, desde las federales hasta las locales, para limitar sus facultades a aquellas consistentes con su mandato.

Para solucionar estos y otros problemas del sistema de justicia penal, se incluyeron en el diagnóstico múltiples propuestas puntuales. Entre las acciones recomendadas, se tienen algunas directamente relacionadas con cambios a la procuración de justicia en México. Aunque algunas de ellas ya han sido atendidas, mediante reformas legales y acciones gubernamentales en la mayoría de las Entidades Federativas, ha sido reiterativo el llamado a homologar a estas propuestas los sistemas locales, en los siguientes aspectos:

- Establecer constitucionalmente la autonomía del ministerio público, siempre y cuando se establezca previamente un sistema procesal de corte acusatorio.

- Reformar radicalmente el sistema procesal penal, a fin de eliminar totalmente las atribuciones para jurisdiccionales del ministerio público en el desahogo y valoración de medios de prueba.

- Establecer el principio en el sentido de que “las investigaciones deberán ser secretas y los juicios públicos”.

- Legislar sobre las responsabilidades de los ministerios públicos federales y locales con respecto a la prohibición de incomunicar a los individuos detenidos.

- Proporcionar a las víctimas la posibilidad de entablar acciones penales independiente- mente del ministerio público. Se debe facultar a los particulares para que estos se alleguen de las pruebas necesarias y eleven los casos ante el Poder Judicial, así como despojar al ministerio público de esta tutela forzada cuando el asunto no requiera su intervención.

Son precisamente los primeros dos puntos del diagnóstico y recomendaciones, los que motivan y justifican la modificación planteada por los promoventes.

B. Es relevante señalar que la reforma a la justicia penal del año dos mil ocho dio cumplimiento a varios compromisos internacionales; muy especialmente a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano dentro del marco del sistema de Naciones Unidas, tanto en cuestiones de derechos humanos como de combate a la delincuencia organizada. Estos compromisos responden a dos visiones globales:

- Garantizar y proteger los derechos civiles y políticos relacionados con la administración de la justicia, tales como la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, el debido proceso y la presunción de inocencia.

- Combatir el narcotráfico y el crimen organizado buscando la máxima eficacia a las medidas de detección y represión a través del ejercicio de cualesquiera facultades legales discrecionales.

Los compromisos relacionados con la aplicación de la justicia se gestaron desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En ella se establecieron derechos tales como la presunción de inocencia (art. 11) y el derecho a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación en materia penal (art. 10).

Los derechos mencionados en el párrafo anterior no estuvieron plasmados con claridad suficiente en el marco normativo mexicano sino hasta la reforma constitucional de 2008. Así, esta reforma no puede interpretarse como una transformación innovadora del Estado mexicano, sino como la reparación de un grave retraso en la alineación de nuestro marco normativo con el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

En contraste, los compromisos de combate al narcotráfico y al crimen organizado nacen de tratados internacionales recientes, los cuales también le imponen obligaciones vinculantes al Estado Mexicano. Los dos instrumentos más relevantes al respecto son:

- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 (también conocida como la Convención de Palermo).

Por su parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) publicó recientemente un diagnóstico de las problemáticas generales y específicas de la procuración de justicia en México durante la etapa previa y el proceso de transición de Procuradurías a Fiscalías, tanto a nivel Federal como en

cada una de las Entidades Federativas, dentro de su documento denominado “Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal”. Durante su labor de seguimiento del proceso de implementación de las autonomías de fiscalías, este centro de investigación identificó diversos factores que obstaculizan la adecuada procuración de justicia en los niveles nacional y de los Estados, incluyendo a la Ciudad de México. Como parte de la problemática general, el equipo de investigadores de CIDAC señaló los siguientes factores:

- Carencia de una visión sistémica de seguridad y justicia. No se cuenta con una visión general que permita enmarcar la procuración de justicia como parte de una política integral del Estado Mexicano, en la cual se involucre a todas las instituciones que tienen corresponsabilidad en los ámbitos de seguridad y justicia, las reformas legales han transitado más por el método para elegir fiscales que por la consolidación de la autonomía en sí; los cuerpos legislativos han sido más enfocados en la manera en que se elige al fiscal que en supervisar si en sus normas orgánicas se plasma esa autonomía.

- Transiciones nominales hacia Fiscalías, sin transformación institucional ni diseños y contrapesos que garanticen autonomía. Muchas de las transiciones hacia un esquema de fiscalía, en las entidades federativas, fueron solamente nominales pues en muchos casos, se mantuvo una subordinación financiera y política, malinterpretando el concepto de equilibrio de poderes; para la consolidación del sistema es más valioso que el Congreso de la Entidad valide la política criminal y la evalúe que ver si las propuestas de fiscales emanan de grupos de notables, decanos, oráculos académicos o la sociedad civil a mano alzada.

- Falta de definición de políticas criminales y planes de persecución del delito. No se han establecido criterios institucionales que permitan a los operadores del sistema de justicia distinguir de forma estandarizada entre delitos de distintas complejidades con el fin de determinar el mecanismo de solución más apropiado.

- Ausencia de un modelo homologado de organización y gestión en las instituciones de procuración de justicia. Se carece de un modelo homologado de operación de las instituciones de procuración de justicia, el cual permita bases mínimas de estandarización y de adaptación a contextos particulares, de tal manera que haga posible la comparación y la evaluación de dichas instituciones.

- Uso excesivo de esquemas de especialización por tipo penal y por etapa procesal. Las instituciones de procuración de justicia han insistido en especializar su operación por tipo de delito lo cual ha derivado en una falta de coordinación y comunicación entre las distintas unidades especializadas.

- Violación sistemática de derechos humanos a víctimas e imputados. Históricamente las instituciones de procuración de justicia han violado de forma sistemática los derechos humanos, tanto de víctimas como de imputados; situación que no se ha corregido con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.

- Nula credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. Los operadores de las instituciones de procuración de justicia, principalmente las locales, se encuentran entre los servidores públicos que menor confianza generan entre la población.

Así las cosas, para esta dictaminadora no pasan desapercibidos los diagnósticos y análisis derivados de los alcances y potencial de la reforma constitucional que da origen a la necesidad de establecer un marco de autonomía para las Fiscalías, por lo que, respecto de las iniciativas objeto de análisis y dictamen, es preciso señalar que dichos estudios especializados han focalizado el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia en dos grandes elementos:

1. Que la autonomía de las procuradurías y su conversión a fiscalías constitucionalmente autónomas es la clave para el fortalecimiento institucional,

sistémico, operativo, funcional y de salvaguarda de los derechos humanos de los gobernados;

2. Que dicha autonomía no debe condicionarse al método de elección de la persona titular de este órgano constitucional autónomo, por lo que los esfuerzos institucionales y legislativos deben orientarse hacia la planificación, estructuración y elaboración de los programas y planes que conforman la política criminal; en este sentido, es fundamental que los esfuerzos parlamentarios se concentren en la elaboración de un marco orgánico para la fiscalía eficaz, transparente, alineado a estándares internacionales y no se pierda la objetividad en cual debe ser el método de designación.

Por los puntos anteriormente razonados, esta Comisión dictaminadora considera que, dado el esfuerzo implícito en las iniciativas que se analizan, la reforma constitucional deberá focalizarse en crear y dotar de autonomía a la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como en establecer los contenidos fundamentales y organizacionales de ésta, fijar un procedimiento homologado de designación sin las redundancias procesales y legales de otras entidades y finalmente, dejar claro el imperativo para que el Congreso del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, elabore y expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia Estatal y de inicio su operación bajo el nuevo esquema normativo que amerita.

V. Es de destacarse que, como se adelantó, las propuestas contienen puntos que convergen en lo esencial, a saber, el de la autonomía constitucional de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado; incluso son tan coincidentes, que en las tres se considera la posibilidad de que la persona titular de la Fiscalía dure en su encargo siete años sin posibilidad de reelección.

Esta Comisión dictaminadora es consciente del hecho de que la procuración de justicia es un modelo de alta exigencia social que lamentablemente

transita en distintas regiones del país por su crisis más grave, dados los bajos índices de aceptación y confianza ciudadana, precisamente sabedores de ello, la transformación y consolidación de la independencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala es un proceso de largo plazo que, sin embargo, requiere de una estrategia que incluya acciones en el corto y el mediano tiempo.

La primera de ellas, es la transición de procuraduría a fiscalía independiente, la cual no es posible sin las correspondientes adaptaciones normativas necesarias, como el ajuste del marco normativo estatal a los contenidos establecidos desde el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como consecuencia de ello, la correspondiente emisión de las leyes orgánicas, con la finalidad de eludir la diversidad de interpretaciones y criterios, así como dotar de certeza tanto al proceso de transición como a la operación misma, en este sentido ambas Iniciativas coinciden, tanto con la dimensión de autonomía como con la necesidad de establecer un marco jurídico de esta naturaleza.

Aunado a lo anterior, se coincide en que es necesario establecer un esquema de gradualidad tanto de reconversión personal y traspaso de los recursos, así como para la resolución paulatina de casos vigentes. Este proceso debe contemplar una estrategia de gestión de cambio, así como la desburocratización escalonada de los procesos y esquemas de trabajo, con la finalidad última de transitar de una función de administración de expedientes a una función de investigación criminal, aspecto que se encuentra debidamente solventado en el régimen transitorio del decreto que se emite.

En ese orden de ideas, será fundamental la articulación de un esquema de indicadores que permitan llevar a cabo un seguimiento y monitoreo permanente al proceso de transición. El establecimiento de mecanismos efectivos de supervisión, control y evaluación dotaran al proceso de una visión de mejora continua, a partir de información objetiva para la toma de decisiones, elemento que será fundamental una vez que el Congreso del Estado expida la correspondiente

Ley Orgánica de la Fiscalía, en el momento procesal que se mandata en el régimen transitorio.

Por los razonamientos expuestos, la suscrita Comisión somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente:



**PROYECTO
DE
DECRETO**

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 1°, 45, 47, 48 y 120 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 2 párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, **se reforma** el párrafo séptimo del artículo 20, las fracciones XXVI y LXII del artículo 54, los artículos 71, 72, 73, 74 y 76, el párrafo tercero del artículo 78, el inciso d) de la fracción III del artículo 81, la fracción VI del párrafo primero del artículo 83, la fracción V del párrafo primero del artículo 106, el artículo 109 y el párrafo segundo del artículo 113, y **se adicionan** una fracción LXIII, recorriéndose en su orden la actual, al artículo 54, un artículo 54 Bis, una fracción XIII Bis al artículo 70, un artículo 73 Bis, un artículo 74 Bis, un Capítulo V denominado “DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO” al Título VIII, un artículo 97 Ter, un artículo 97 Quáter, un artículo 97 Quinquies y un artículo 97 Sexies, todos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20.- ...

...

...

...

...

...

Las funciones de procuración de justicia, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se realizarán con base en los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, autonomía, independencia, objetividad, eficiencia, disciplina, honradez, unidad, buena fe, presunción de inocencia, profesionalismo, diligencia, lealtad, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.

...

...

ARTÍCULO 54.- ...

I. ... a XXV. ...

XXVI. Designar a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de las Fiscalías Especializadas, a partir de la terna que contenga las propuestas que le presente la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

El Congreso del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de quienes integren la Legislatura, podrá remover a las personas titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de las fiscalías especializadas, por las causas graves que establezca la ley, previa acreditación de las mismas, así declarada en resolución firme;

XXVII. ... a LXI. ...

LXII. Determinar con relación al otorgamiento de haberes de retiro, a favor de las personas que hayan ejercido la titularidad de alguna Magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Tribunal Electoral de Tlaxcala, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley;

LXIII. Expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y

LXIV. ...

ARTÍCULO 54 BIS.- Para el nombramiento de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se estará al procedimiento siguiente:

I. El Congreso del Estado analizará la terna que proponga la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado y, de entre las personas propuestas, realizará la designación, dentro de los quince días naturales posteriores a la presentación de dicha terna;

II. Las personas propuestas en la terna deberán cumplir los requisitos normativos y de idoneidad para desempeñar el cargo;

III. El Congreso designará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, previa comparecencia de las personas propuestas;

IV. En el supuesto de que el Congreso rechace la terna presentada por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, ésta formulará nueva terna;

V. El procedimiento indicado en las fracciones anteriores se seguirá hasta que se realice la designación, y

VI. El mismo procedimiento se seguirá para la designación de las personas titulares de las fiscalías especializadas.

La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado será nombrada para ocupar el cargo durante siete años, sin posibilidad de ser designada para otro periodo de forma inmediata.

ARTÍCULO 70.- ...

I. ... a XIII. ...

XIII Bis. Someter a consideración del Congreso las ternas de personas que proponga para la designación de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como para el nombramiento de las personas titulares de las fiscalías especializadas;

XIV. a XL. ...

ARTÍCULO 71.- La Institución del Ministerio Público del Estado se organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado, con la naturaleza de un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

ARTÍCULO 72.- La Fiscalía General de Justicia del Estado, en representación jurídica de la sociedad, velará por el cumplimiento de las leyes.

Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a las policías la investigación de los delitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado realizará una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho; solicitará las medidas cautelares y ejercerá las acciones que correspondan contra los imputados; obtendrá y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en los hechos que las leyes señalen como delitos; hará efectivos los derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afecten a las personas a quienes se debe otorgar especial atención conforme a la ley; tendrá en su estructura órganos de dirección, profesionales y técnicos, fiscalías especializadas, así como una corporación policíaca, y se regirá por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, autonomía, independencia, objetividad, eficiencia, disciplina, honradez, unidad, buena fe, presunción de inocencia, profesionalismo, diligencia, lealtad, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.

La policía preventiva del Estado y las de los municipios colaborarán con la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el combate a la delincuencia, conforme a los convenios que al respecto se celebren.

Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez especializado para adolescentes, se dispondrá de agentes policíacos especializados para la atención de esos asuntos, bajo los principios de interés especial en la adolescencia, transversalidad, subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de protección integral de los derechos de los adolescentes.

Los agentes de policía que traten de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención e investigación de presuntas conductas antisociales cometidas por adolescentes, estarán debidamente instruidos y capacitados de forma permanente para el funcionamiento de sus atribuciones.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, regulará su estructura, funcionamiento, competencia y administración, conforme lo dispone este mandato.

Garantizar la seguridad pública es un deber del Estado; para ello contará con una corporación de policía que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Esta policía prestará auxilio a las autoridades, para el debido cumplimiento de sus atribuciones y se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

ARTÍCULO 73.- La institución del Ministerio Público estará a cargo de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuya designación se hará por el Congreso, a propuesta, en terna, de la persona Titular del Poder Ejecutivo.

Las ausencias temporales de la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado serán suplidas en los términos que determine la Ley. En caso de ausencia definitiva, se iniciará el procedimiento de designación establecido en esta Constitución.

ARTÍCULO 73 BIS.- La persona titular del Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso la remoción de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por las causas graves que establezca la ley. En el escrito de solicitud de remoción deberán expresarse los motivos y fundamentos y ofrecerse las pruebas respectivas.

El Congreso podrá rechazar la solicitud, conforme al procedimiento que señale la Ley.

Durante los recesos del Congreso, la Comisión Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario de sesiones, para conocer de la solicitud de remoción.

ARTÍCULO 74.- La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. ... a VIII. ...

ARTÍCULO 74 BIS.- Durante los primeros quince días del mes de enero de cada año, la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, presentará al Congreso y al Poder Ejecutivo un informe de actividades de la Institución del Ministerio Público a su cargo, y deberá comparecer ante el Poder Legislativo cuando se le requiera para informar sobre su gestión.

ARTÍCULO 76.- La operación del sistema integral de justicia para adolescentes estará a cargo de instancias de la Fiscalía General de Justicia del Estado, jurisdiccionales y administrativas especializadas en la materia. La ley que se expida establecerá su estructura, y normará su funcionamiento, competencia y administración.

ARTÍCULO 78.- ...

...

La Fiscalía General de Justicia del Estado y las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse entre sí para cumplir objetivos comunes de seguridad y conformar el sistema nacional de seguridad pública, en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 81.- ...

I. ... a II. ...

III. ...

a) ... a c) ...

d) A la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en los asuntos relativos a las funciones de ese Ente, y

e) ...

IV. ...

a) ... a e) ...

f) A la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en los asuntos relativos a las funciones de ese Ente.

V. ... a VII. ...

ARTÍCULO 83.- ...

I. a V. ...

VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Diputado local, Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación.

VII. ...

...

...

...

...

CAPÍTULO V DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

ARTÍCULO 97 TER.- La Fiscalía General de Justicia del Estado, tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Establecer una política para investigar y perseguir de manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando lo determine la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la policía de investigación;
- II. Expedir reglas para la administración eficiente de los recursos materiales y humanos de la institución;
- III. Instituir mecanismos de asistencia con las instituciones de seguridad ciudadana, en las formas y modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus actuaciones;
- IV. Establecer un servicio profesional de carrera, con reglas para la selección, ingreso, formación, promoción y permanencia de las personas servidoras públicas;
- V. Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad ciudadana, en las formas y modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus actuaciones;
- VI. Fungir como representante social y del Estado, cuando la ley lo disponga;
- VII. Participar en las instancias relacionadas con los sistemas estatal, municipal y nacional de seguridad;

VIII. Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con los poderes del Estado, con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con los demás órganos autónomos y con los municipios, para el mejor desempeño de sus funciones; y

IX. Las demás que se prevean en esta Constitución y las leyes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado contará, en su estructura orgánica, con una unidad interna de estadística y transparencia, que garantice la publicación oportuna de información, y con una unidad interna de combate a la corrupción y a la infiltración de la delincuencia organizada.

ARTÍCULO 97 QUÁTER.- La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado deberá presentar, ante el Congreso, un plan de política criminal cada año, el primer día del segundo periodo de sesiones.

Dicho plan contendrá en un diagnóstico de la criminalidad y la proyección de las acciones que emprenderá el Ministerio Público al respecto, criterios sobre los delitos que se atenderán de manera prioritaria y metas de desempeño para el siguiente año.

ARTÍCULO 97 QUINQUIES.- La Fiscalía General de Justicia del Estado tendrá fiscalías especializadas para la investigación de determinados delitos, conforme a los que la Ley disponga, las cuales contarán con personal multidisciplinario, capacitado específicamente para cumplir su objeto.

ARTÍCULO 97 SEXIES.- Se establecerán unidades de atención temprana, que brindarán asesoría y orientación legal a las personas denunciantes. Tendrán como objetivo recibir, de forma inmediata, las denuncias y canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del hecho denunciado, de conformidad con la legislación aplicable.

ARTÍCULO 106.- ...

I. ... a IV. ...

V. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario, Titular de la Fiscalía General de Justicia, oficial mayor, titular de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal o local, presidente municipal, tesorero o síndico municipal, en funciones, seis meses previos al día de la designación, y

VI. ... a VII. ...

...

ARTÍCULO 109.- El juicio político procede contra los diputados, el Gobernador del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como contra los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los integrantes de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes:

I. ... a IX. ...

ARTÍCULO 113.- ...

El Secretario de Gobierno y la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como sus subordinados, serán responsables de los actos de su respectivo cuerpo de seguridad y del uso de la fuerza pública.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el artículo 120 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos de los municipios del Estado de Tlaxcala, para los efectos conducentes.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas y cada una de las disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto.

ARTÍCULO CUARTO. Todas las referencias que se hagan en la presente Constitución, así como en la legislación vigente, reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos de carácter público que se refieran a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se entenderán para la Fiscalía General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO QUINTO. Las relaciones laborales de las personas trabajadoras de la Procuraduría General de Justicia preservan el derecho a la seguridad social, en los términos en que actualmente la disfrutan.

ARTÍCULO SEXTO. Los derechos laborales de las personas trabajadoras de la Procuraduría General de Justicia del Estado se preservarán con independencia de su transición a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO SÉPTIMO. El personal que preste sus servicios a la Fiscalía General de Justicia deberá ser seleccionado mediante un concurso de oposición abierto a partir de las bases y la convocatoria que se expida para el concurso de selección. Antes del examen, todos los aspirantes recibirán un curso intensivo de capacitación durante cinco meses que les transmitirá las habilidades necesarias para ser fiscales a través de la aplicación de un examen de selección que evaluará que las y los aspirantes cuenten con las capacidades prácticas necesarias para desempeñarse efectivamente como fiscales.

En la selección de agentes del Ministerio Público y el resto del personal de la Fiscalía se respetará el principio de paridad de género.

ARTÍCULO OCTAVO. La Fiscalía General de Justicia del Estado deberá comenzar operaciones a más tardar el 1 de agosto de 2024.

ARTÍCULO NOVENO. La Procuraduría General de Justicia del Estado continuará encargándose de la función ministerial hasta que inicie sus funciones la Fiscalía General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO. Todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, antes que entre en funcionamiento la Fiscalía General de Justicia del Estado, se concluirán por ésta en los términos de las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley que la rija.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Congreso del Estado de Tlaxcala deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en un término improrrogable que no excederá del 30 de junio del 2024.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, será designada por el Congreso, a más tardar el último día del mes de julio del año 2024.

**AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE
Y MANDE PUBLICAR**

Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

**DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO
PRESIDENTA**

**DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH
AVELAR
VOCAL**

**DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN
VOCAL**

**DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO
JIMÉNEZ
VOCAL**

**DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ
VOCAL**

**DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ
ORTIZ
VOCAL**

**DIP. MÓNICA SÁNCHEZ
ANGULO
VOCAL**

**DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN
MARTÍNEZ
VOCAL**

**DIP. LENIN CALVA PÉREZ
VOCAL**

DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA

DIP. VICENTE MORALES PÉREZ


VOCAL

DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ
VOCAL

VOCAL

DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA
VOCAL

Última hoja del dictamen con proyecto de Decreto derivado de los expedientes parlamentarios números **LXIV 099/2021, LXIV 007/2023 y LXIV 036/2023.**



TODA VEZ QUE HAN SIDO APROBADOS EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS, QUE FUERON RESERVADOS PARA SU DISCUSIÓN, POR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, Y EN VIRTUD DE QUE YA FUERON APROBADOS LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS, SE DECLARA APROBADO EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO **GENERAL Y EN LO PARTICULAR**, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; **SE ORDENA AL SECRETARIO PARLAMENTARIO REMITA EL PROYECTO DE DECRETO, A LOS 60 AYUNTAMIENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA.**

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, PARA CREAR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO**; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

No.	DIPUTADOS	DISPENSA SEGUNDA LECTURA	VOTACIÓN EN LO GENERAL	VOTACIÓN EN LO PARTICULAR ARTÍCULOS NO RESERVADOS	VOTACIÓN ARTÍCULOS RESERVADOS PROP. DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA	ARTÍCULOS RESERVADOS COMO FUERON PROPUESTOS POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA
No.	DIPUTADOS	22-0	22-0	22-0	2-20	20-1
1	Ever Alejandro Campech Avelar	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
2	Diana Torrejón Rodríguez	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
3	Jaciel González Herrera	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
5	Vicente Morales Pérez	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
6	Lenin Calva Pérez	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
9	Maribel León Cruz	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
13	Bladimir Zainos Flores	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
14	Miguel A Covarrubias Cervantes	X	X	X	X	X
15	María Guillermina Loaiza Cortero	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
17	Fabrizio Mena Rodríguez	P	P	P	P	P
18	Blanca Águila Lima	✓	✓	✓	✓	X
19	Juan Manuel Cambrón Soria	✓	✓	✓	✓	EN CONTRA
20	Lorena Ruíz García	P	P	P	P	P
21	Laura Alejandra Ramírez Ortiz	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
22	Rubén Terán Águila	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
23	Marcela González Castillo	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
24	Jorge Caballero Román	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓
25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	✓	✓	EN CONTRA	✓

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN MATERIA DE HABER DE RETIRO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número **LXIV 038/2024**, que contiene la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 15 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA EN MATERIA DE HABER DE RETIRO**, que presentó el Diputado **FABRICIO MENA RODRÍGUEZ**, para su análisis y dictamen correspondiente.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Comisión Permanente de esta LXIV Legislatura, en lo relativo al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, y 54 fracciones II y LXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 1 fracción I, 36, 37 fracción XX, 38 fracción I y VII, 57 fracción III, 64, 76, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; se procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTADOS

1. El Diputado **Fabricio Mena Rodríguez;** presentó la iniciativa que nos ocupa el día doce de marzo del año dos mil veinticuatro, ante el Diputado presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado y, posteriormente, fue leída en sesión ordinaria de ese Órgano Legislativo el día doce del mismo mes.

A efecto de motivar la iniciativa de referencia, el promovente de esta iniciativa literalmente expresó, en esencia, lo siguiente:

"La presente iniciativa tiene por objeto establecer en la legislación sustantiva, la regulación procedimental, así como los montos correspondientes al denominado Haber de Retiro de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

En este sentido, el Haber de Retiro forma parte integrante de las garantías constitucionales de la función judicial, en particular, del principio de estabilidad e inamovilidad, por lo que en diversos precedentes judiciales se ha establecido que en las normas emitidas por los Congresos Locales de las Entidades Federativas se debe garantizar un haber por retiro determinado por el Congreso del Estado, asimismo se menciona que para el otorgamiento de dicho haber no permite distinciones entre los Magistrados que han sido designados, sino que corresponde a todos ellos por igual sin que sea admisible distingo alguno, por tratarse se un elemento inherente al cargo mismo. "

2. En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Local, celebrada el doce de marzo de la anualidad que transcurre, se instruyó turnar la iniciativa con proyecto de Decreto de mérito a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su análisis y formulación del dictamen correspondiente.

Lo anterior fue así, en el entendido de que, con dicha iniciativa se formó el expediente parlamentario número **LXIV 038/2024**.

El turno ordenado se concretó mediante oficio sin número, girado por el Secretario Parlamentario del Congreso Estatal, el día doce de marzo del presente año, y presentado el día trece del mismo mes, ante la Presidencia de esta Comisión.

Con los antecedentes narrados, la Comisión suscrita emite los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

I. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que "**Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. ...**".

Asimismo, en el diverso 54 fracción II de la Máxima Ley de esta Entidad Federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal "**Reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, de conformidad con su competencia...**".

La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que en su fracción II define al Decreto como "**Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos...**".

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala se prevén las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local,

para **“recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”**, así como para **“cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados”**; respectivamente.

En lo específico, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se fundamenta en el artículo 57 fracción IV del Reglamento invocado, se establece que le corresponde el conocimiento **“... De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal; ...”**.

Por ende, dado que la materia a analizar consiste en una iniciativa tendente a adicionar un tercer párrafo al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, es de concluirse que esta comisión es **COMPETENTE** para dictaminar al respecto.

III. En la iniciativa se plantea una reforma cuyo objeto es el del cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, al Recurso de Revisión Administrativo con número de expediente 361/2022 de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintitrés, por la cual se invoca la omisión legislativa respecto de la falta en la legislación estatal, respecto de la regulación y montos del Haber de Retiro de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y por la que el antes citado Tribunal Colegiado de Circuito mandata al Congreso del Estado de Tlaxcala a lo siguiente:

- El Congreso del Estado de Tlaxcala, ante la ausencia de regulación precisa y clara del haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta Entidad (omisión legislativa), deberá avocarse a cumplir con el mandato de la constitución federal sobre el tema, en los términos de lo expuesto en esta sentencia.
- Para ello, a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones que se celebre, deberá cumplir con su obligación de legislar respecto del haber de retiro de los Magistrados locales

y emitir dentro del mismo período la norma correspondiente, ordenando en consecuencia su inmediata vigencia.

- Asimismo, el Congreso del Estado de Tlaxcala deberá dejar insubsistente el acuerdo legislativo, aprobado en sesión ordinaria pública celebrada el once de noviembre de dos mil veintiuno, publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, respecto del haber de retiro otorgado al quejoso.
- En el mismo acto el Congreso del Estado de Tlaxcala deberá emitir, con libertad de decisión, las determinaciones conducentes que garanticen, mientras se sustancia el procedimiento legislativo correspondiente y entra en vigor la normatividad aplicable al haber de retiro y la resolución definitiva correspondiente, una cantidad económica en forma mensual que permita al quejoso atender sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, y su subsistencia de manera digna (mínimo vital); de modo que la misma no podrá ser inferior al 50% del último salario neto que percibía como Magistrado del Tribunal Superior Justicia del Estado de Tlaxcala.
- Una vez subsanada la omisión legislativa precisada, inmediatamente a su vigencia, con libertad de jurisdicción, el Congreso local deberá llevar a cabo el procedimiento correspondiente en relación con la determinación a favor del quejoso a gozar de su haber del retiro, conforme a la mecánica que establezca la normatividad aplicable que hubiese expedido, cuyo monto no podrá ser inferior al haber de retiro que ya se había otorgado.

De lo anterior, se desprende que esta dictaminadora procede al análisis de la Iniciativa objeto de dictamen en dos aspectos fundamentales:

- a) Que la reforma colme en sus términos lo establecido en la sentencia recaída al Recurso de Revisión Administrativo con número de expediente 361/2022 de fecha veintisiete de

septiembre del dos mil veintitrés, por la cual se invoca la omisión legislativa respecto de la falta en la legislación estatal, respecto de la regulación y montos del Haber de Retiro de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

- b) Que se cumplan las formalidades procesales parlamentarias, a efecto de estar en condiciones de emitir una reforma que no se encuentre fuera de los parámetros legales de deliberación por parte del Congreso del Estado.

Respecto del primer aspecto, el Tribunal Colegiado de Circuito ha establecido que el Haber de retiro forma parte integrante de las garantías constitucionales de la función judicial, particularmente del principio de estabilidad e inamovilidad, por lo que, si bien los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, dotándoles de libertad en su configuración para nombramientos y ratificaciones, se deben garantizar la estabilidad en el cargo y su independencia, la cual se concreta en los siguientes parámetros:

a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; y

b) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos Locales;

Por lo tanto, el Haber de Retiro es un componente directo de las garantías constitucionales y de la función jurisdiccional, es una garantía a favor de la sociedad para que el Poder Judicial se integre con juzgadores profesionales, dedicados de forma exclusiva a su labor, despreocupados de su futuro a corto, mediano, e incluso largo plazo, y sujetos únicamente a los principios y exigencias propias de la institución judicial.

La estabilidad de los titulares es indispensable para la estabilidad de la jurisdicción y condición para la independencia y autonomía judicial.

En este sentido, el Tribunal consideró la omisión legislativa respecto de la no legislación en materia de Haber de Retiro, en virtud de que manifiesta que existe obligación del constituyente local de legislar sobre el haber de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ésta facultad para legislar ha sido incumplida totalmente, y que tal abstención supone una vulneración a derechos.

Sin embargo, esta Dictaminadora considera fundamental clarificar en el presente instrumento, que efectivamente, al momento de emitir el fallo por parte del Tribunal Colegiado de Circuito existía una omisión legislativa consistente en la no existencia regulatoria en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, respecto de Haber de Retiro, sin embargo, el propio órgano jurisdiccional desconocía que en el lapso de deliberación de la sentencia objeto de reforma ya se había activado el proceso legislativo de reforma y adición a la propia Constitución Local para, efectivamente, establecer en el texto del Artículo 79 último párrafo, el mandato para otorgar un Haber de Retiro, el cual se encuentra debidamente regulado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 79.- ...

...

*Al finalizar su encargo, quien haya ejercido el cargo de titular de alguna Magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante por lo menos seis años, **tendrá derecho a un haber de retiro** y no podrá ejercer actos de representación legal o litigio, en aquellos temas relacionados con la función que haya desempeñado"*

Por ello, esta Comisión dictaminadora coincide con la precisión establecida en la Exposición de Motivos objeto de análisis, en el sentido de que, cuando el órgano jurisdiccional emitió el fallo que motiva la presente Iniciativa, se encontraba en desconocimiento y en situación de imprevisibilidad de que, en fecha posterior, el propio Congreso del Estado de Tlaxcala, emitiera una reforma a la Constitución Local, precisamente para establecer el haber de retiro en los términos de la sentencia.

Cabe señalar que, a pesar de que el Haber de Retiro si se encuentra regulado en el Artículo 79 párrafo último de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, este Congreso considera que esta regulación cumple solo parcialmente la sentencia multicitada, en virtud de que esta regulación se encuentra en la norma sustantiva a manera de reconocimiento de derecho, por lo que en el correcto ejercicio de técnica legislativa no es en la Constitución sino en la norma adjetiva donde debe quedar plasmado el procedimiento para el otorgamiento del Haber de Retiro y de esta forma, cumplimentar totalmente la sentencia a la que se refiere la Iniciativa objeto de dictamen.

Por lo anterior y respecto del aspecto de cumplimiento y alineación a la sentencia recaída al Recurso de Revisión Administrativo con número de expediente 361/2022 de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintitrés, esta Dictaminadora considera que la reforma a la ley adjetiva es procedente y cumple a cabalidad con lo establecido en los efectos del Amparo, específica y directamente en sus numerales 1 y 2, así como a los numerales 3, 4 y 5 de manera indirecta pero de cumplimiento consecuente, una vez que se hubiese completado el proceso legislativo mandatado en la norma jurídica individualizada que dio origen a la iniciativa.

Asimismo, y respecto de las formalidades parlamentarias, la Iniciativa se encuentra debidamente alineada a los preceptos plasmados en la técnica legislativa para la emisión de textos normativos, aunado al hecho de que se presenta en el pleno ejercicio de la función parlamentaria, por lo que cumple a cabalidad con todos y cada uno de los elementos formales, materiales y de proceso

legislativo regulado en la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior.

Para esta dictaminadora el cumplimiento de lo expresado en la resolución del órgano jurisdiccional, más que un mandato es interpretado desde su dimensión positiva, como la materialización del equilibrio y división de poderes en todo régimen democrático de derecho, por lo que los contenidos de la sentencia multicitada se consideran un valioso aporte que permitirá, a partir de los ajustes legales establecidos, perfeccionar y armonizar la relación entre poderes en un sano y enriquecedor ejercicio de pesos y contrapesos.

En virtud de lo expuesto, la Comisión dictaminadora se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta Entidad Federativa, **se adiciona** un párrafo tercero al artículo 15 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala**, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

...

Al finalizar su encargo, quien haya ejercido el cargo de titular de alguna Magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tendrá derecho a un haber de retiro, tomando como referencia el salario base, así como la correspondiente percepción complementaria

mensual, aguinaldo anual, prima vacacional, bono anual y bono anual especial, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

- I. El primer año, recibirá el setenta por ciento de las percepciones anteriormente mencionadas, en razón de su carácter de Magistrada o Magistrado;
- II. El segundo año, recibirá el sesenta por ciento de las percepciones anteriormente mencionadas, en razón de su carácter de Magistrada o Magistrado; y
- III. El tercer año, recibirá el cincuenta por ciento de las percepciones anteriormente mencionadas, en razón de su carácter de Magistrada o Magistrado.

La mecánica y el procedimiento para su entrega, se realizará de conformidad con los lineamientos y acuerdos administrativos aplicables en materia de remuneraciones del Tribunal.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del cumplimiento de la dictada en el juicio de amparo indirecto radicado en el expediente número **1171/2022**, del Juzgado Primero de Distrito, en el Estado, infórmese a ese Órgano Jurisdiccional el contenido de este Decreto, después que inicie su vigencia, para que tenga por cumplimentada la indicada resolución, en lo conducente.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

**AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE
Y MANDE A PUBLICAR**

Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

**DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO
PRESIDENTA**

**DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH
AVELAR
VOCAL**

**DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN
VOCAL**

**DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO
JIMÉNEZ
VOCAL**

**DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ
VOCAL**

**DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ
ORTIZ
VOCAL**

**DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO
VOCAL**

**DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN
MARTÍNEZ
VOCAL**

**DIP. LENIN CALVA PÉREZ
VOCAL**

**DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN
SORIA
VOCAL**

**DIP. VICENTE MORALES PÉREZ
VOCAL**

**DIP. DIANA TORREJÓN
RODRÍGUEZ
VOCAL**

**DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA
VOCAL**

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DERIVADO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO **LXIV 038/2024**.

EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO **GENERAL Y EN LO PARTICULAR**, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE **ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN MATERIA DE HABER DE RETIRO**; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

		DISPENSA SEGUNDA LECTURA	VOTACIÓN EN LO GENERAL	VOTACIÓN EN LO PARTICULAR
No.	DIPUTADOS	18-0	19-0	19-0
1	Ever Alejandro Campech Avelar	✓	✓	✓
2	Diana Torrejón Rodríguez	X	X	X
3	Jaciel González Herrera	✓	✓	✓
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	✓	✓
5	Vicente Morales Pérez	✓	✓	✓
6	Lenin Calva Pérez	✓	✓	✓
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	✓	✓
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	✓	✓
9	Maribel León Cruz	✓	✓	✓
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	✓	✓	✓
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	✓	✓
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	✓	✓
13	Bladimir Zainos Flores	✓	✓	✓
14	Miguel Ángel Covarrubias Cervantes	X	X	X
15	María Guillermina Loiza Cortero	✓	✓	✓
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	✓	✓	✓
17	Fabrizio Mena Rodríguez	P	P	P
18	Blanca Águila Lima	X	X	X
19	Juan Manuel Cambrón Soria	X	X	X
20	Lorena Ruíz García	P	P	P
21	Laura Alejandra Ramírez Ortiz	✓	✓	✓
22	Rubén Terán Águila	✓	✓	✓
23	Marcela González Castillo	X	✓	✓
24	Jorge Caballero Román	✓	✓	✓
25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	✓	✓

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE **AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, A EFECTUAR LA DESINCORPORACIÓN DEL REGISTRO PATRIMONIAL DE ESE MUNICIPIO, Y EJERCER ACTOS DE DOMINIO, MEDIANTE COMPRA-VENTA, RESPECTO DE CUARENTA Y SEIS UNIDADES VEHICULARES;** QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número **LXIV 134/2023**, que contiene el oficio número **DESPACHO/0416/2023/SP**, signado por **Juan Salvador Santos Cedillo**, Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, a través del cual solicitó la autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto a diversas unidades vehiculares, que forman parte del patrimonio municipal; para su análisis y formulación del dictamen correspondiente.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 35, 36, 37

fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso Local, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTANDOS

1. En fecha veinticinco de agosto del año próximo pasado, el ciudadano **Juan Salvador Santos Cedillo**, Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, presentó el oficio número **Despacho/0416/2023/SP** y documentos anexos, a través del que, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en sus artículos 80, 83 y 84 fracción I; en la Ley del Patrimonio Público para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en su artículo 8 fracciones IV y V, y conforme a los Lineamientos para la Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles de los Entes Públicos del Estado de Tlaxcala, emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, solicito a esta Soberanía autorización para ejercer actos de dominio respecto a diversas unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, para tal efecto el Múncipe promovente adjuntó lo siguiente:

- Acta de la sesión de Cabildo celebrada en fecha veintiocho de julio del año dos mil veintitrés. Del contenido de ese documento se observa que, al desahogarse el punto número seis del orden del día, el Presidente Municipal puso en conocimiento del Cabildo lo relacionado con la situación de los vehículos propiedad del Municipio que, por su deterioro, son inutilizables para cumplir las actividades a que estaban destinados, derivándose la necesidad de desincorporarlos del registro patrimonial del Municipio citado y proceder a su enajenación.

En ese sentido, presentó ante el Cabildo el punto de acuerdo número **ACDO-102/04-ORD. /026/2023**, mediante el cual se aprueba el proceso de desincorporación de cuarenta y seis unidades vehiculares, propiedad del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, y cuyo listado se agregó al acta de aquella sesión de Cabildo, como parte integrante de la misma. Sometido que fue a votación el punto de referencia, después del cómputo correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento informó que dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.

En la misma sesión de Cabildo, para cumplir con lo previsto en el numeral 83 fracción II de la Ley Municipal del Estado, se aprobó que de los recursos que se obtengan por la venta de los bienes a desincorporar se destinen a la ejecución de obra pública, en beneficio del Municipio de Huamantla, Tlaxcala.

Con el mencionado oficio, el Presidente Municipal promovente anexó un listado donde se relacionan los cuarenta y seis vehículos, el cual se da por reproducido en sus términos, para los efectos del presente dictamen; únicamente se citan las unidades vehiculares por marca y modelo, en los términos siguientes:

- a) Camioneta Courier, marca Ford, modelo 2001.
- b) Camión marca International, modelo 2009.
- c) Camión con canastilla, marca GMS, modelo 1994.
- d) Vehículo Cotour, marca Ford, Modelo 1999.
- e) Vehículo Focus, marca Ford, modelo 2013.
- f) Vehículo Focus, marca Ford, Modelo 2013.

- g)** Camioneta marca Ford, modelo 2000.
- h)** Vehículo GMC, modelo 1990.
- i)** Camión Marca Dodge, modelo 2000.
- j)** Vehículo, marca Chevrolet, modelo 2010
- k)** Vehículo marca Volkswagen, tipo combi, modelo 1999.
- l)** Camioneta tipo pick-up tornado, marca GM Chevrolet, modelo 2004.
- m)** Camión Econoline, marca Ford, modelo 2010.
- n)** Vehículo Chevy pop marca General Motors Chevrolet, Modelo 2004.
- ñ)** Vehículo CRV, marca honda, modelo 2004.
- o)** Motocicleta marca Suzuki, modelo 2011.
- p)** Vehículo línea express van, marca Chevrolet, modelo 2010.
- q)** Vehículo marca Chevrolet, modelo 2008.
- r)** Vehículo marca Ford, tipo J8N, modelo 2012.
- s)** Camión marca Ford, modelo 2010.
- t)** Vehículo marca Ford, tipo J8N, modelo 2012.
- u)** Vehículo tipo Focus, marca Ford, modelo 2012.
- v)** Camión marca Ford, modelo 2010.
- w)** Camión marca Ford, modelo 2010.

- x) Vehículo marca Ford, tipo Focus, modelo 2013.
- y) Vehículo marca Ford, tipo Focus, modelo 2013.
- z) Vehículo marca Ford, tipo Focus, modelo 2013.
- aa) Vehículo marca Toyota, tipo Corolla, modelo 2014.
- bb) Vehículo marca Toyota, tipo Corolla, modelo 2016.
- cc) Vehículo marca Toyota, tipo Corolla, modelo 2014.
- dd) Vehículo marca Toyota, modelo 2014.
- ee) Vehículo tipo sedan, marca Volkswagen, modelo 1999.
- ff) Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2002.
- gg) Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2003.
- hh) Vehículo Marca Chevrolet, tipo Chevy B.L. Pop, modelo 2000.
- ii) Vehículo marca Volkswagen, tipo Sedan unif, modelo 1999.
- jj) Vehículo Marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2004.
- kk) Vehículo marca Volkswagen, tipo Sedan Unif, modelo 1999.
- ll) Vehículo marca Volkswagen, tipo sedan, modelo 2003.
- mm) Vehículo marca Volkswagen, tipo sedan unif, modelo 1999.
- nn) Vehículo, marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2003.
- ññ) Vehículo marca Volkswagen, tipo sedan unif, modelo 1999.
- oo) Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2004.

pp) Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2000.

qq) Vehículo marca Chevrolet, Chevy V.L, modelo 2002.

rr) Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2004.

2. Con el oficio número DESPACHO/0416/2023/SP, de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, exhibió actas circunstanciadas de la inspección física que se practicó a las unidades que se pretenden enajenar, informando que algunas se encuentran en el inmueble de Grúas Breton', ubicado en libramiento México- Veracruz poniente; otras unidades vehiculares en las instalaciones de CONAZA, ubicada en la calle Nicolas Bravo norte; algunas otras en las instalaciones que ocupa el Rastro Municipal y las últimas en diferentes presidencias de comunidad del Municipio, como son: Pueblo Hermenegildo Galeana, Pueblo José María Morelos, Colonia Altamira de Guadalupe, Colonia San diego Xalpatlahuaya, Barrio de Santa Anita, Colonia el Valle, Ranchería de Torres, Colonia Licenciado Mauro Angulo, Colonia San Francisco Notario, Pueblo Benito Juárez, Pueblo Lázaro Cárdenas, Pueblo San José Xicohtencatl, Ranchería Pilares y Colonia San Francisco Tecoac.

3. Con oficio número LXIV/CPCGJAP/DIP.RFBL/039/2023, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, la Diputada Presidenta de la Comisión que suscribe, solicitó al Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, información adicional, relación a diversas unidades vehiculares, a fin de mejor proveer.

4. En respuesta al oficio citado en el punto que antecede, mediante oficio número DESPACHO/0502/2023/SP, de fecha treinta y uno de octubre del año próximo pasado, el Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, formuló

aclaraciones y exhibió un legajo de copias certificadas, que consta de cuarenta y cinco fojas, relativo a las observaciones que se le emitieron y solicitó se continúe con el trámite correspondiente a su solicitud.

5. Con oficio número LXIV/CPCGJAP/DIP.RFBL054/2023, de fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, la Diputada Presidenta de la Comisión dictaminadora, informo al Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, se realizaría una inspección ocular a las unidades vehiculares materia de la solicitud y que, para tal efecto, se fijaron las diez horas del día lunes trece de noviembre de dos mil veintitrés.

En la fecha indicada se realizó dicha diligencia, misma que se concluyó hasta el día diecisiete de noviembre del año próximo pasado, como se observa del contenido del acta correspondiente, documento que se agregó al expediente parlamentario, para constancia.

Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, "Las

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de **Leyes, Decretos o Acuerdos.**
...”

En el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala se determina lo siguiente: **"Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de este".**

La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V, 45 fracción II y 46 fracciones I y II, al establecer lo relacionado al patrimonio de los municipios, remite al procedimiento señalado en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de bienes muebles.

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia de esta Soberanía, para conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por el Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala.

II. En el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala se determina lo siguiente: **"Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio público**

pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso.", aunado a lo previsto en dicha disposición legal, el artículo 45 fracción II del mismo ordenamiento establece que: **"Los Ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles"**.

De las disposiciones legales mencionadas se concluye que la desincorporación implica la separación de un bien del patrimonio estatal o municipal y dejarlos en actitud de enajenación con la autorización de esta Soberanía. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la solicitud del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, respecto al destino de los bienes muebles que han cumplido su utilidad en la Administración Pública Municipal, se encuentra fundada y motivada.

III. El Edil promovente anexó a la solicitud que dio origen al presente procedimiento parlamentario, copia certificada del acta de la sesión de Cabildo de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, y del contenido de dicho documento se observa que al desahogarse el punto sexto del orden del día, el Presidente Municipal expuso diversos razonamientos tendentes a la desincorporación de cuarenta y seis unidades vehiculares, del registro patrimonial del Municipio, y a formalizar la solicitud ante el Congreso del Estado, para estar en aptitud de enajenarlos; propuesta que fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Cuerpo Colegiado Municipal; en el mismo acto, se acordó que los recursos provenientes de la enajenación se destinarían al cumplimiento de acciones que

beneficien a la ciudadanía, en cuanto a ejecución de obra pública, en los términos previstos por el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado.

IV. De las cuarenta y seis unidades vehiculares que se pretenden desincorporar del registro patrimonial de la Municipalidad indicada y enajenarlas, de acuerdo a la documentación exhibida por el promovente, la cual ha sido verificada, principalmente por cuanto hace a las facturas correspondientes, resultando que ninguno de estos documentos tienen alteración en su contenido puesto que se identifica plenamente la marca del vehículo, número de serie y la agencia o distribuidora de automóviles que la expidió, en todos los documentos se especifica el nombre del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, como comprador de cada unidad vehicular; en consecuencia no se observa irregularidad alguna y, por lo mismo, es de concluirse que resulta procedente conceder, por parte de esta Soberanía, la autorización correspondiente.

V. Por cuanto hace a las unidades vehiculares que fueron inspeccionadas en lugares distintos de la cabecera municipal, es decir, en núcleos de población diversos a la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala, las mismas se encuentran materialmente ubicadas en las poblaciones relacionadas por el Presidente Municipal en su oficio DESPACHO/0416/2023/SP, información que fue corroborada al realizar la inspección ocular en términos del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Público del Estado Tlaxcala, resultando que efectivamente los datos proporcionados por el citado Alcalde son correctos, habida cuenta de que si bien es cierto que las unidades se encuentran en las oficinas de las presidencias de comunidad, también lo es que aquellos bienes muebles forman parte del patrimonio municipal, puesto que en la factura correspondiente se señala como titular del

derecho de propiedad al Municipio de Huamantla, Tlaxcala, circunstancias que deben incidir de manera eficaz en la determinación de este Congreso Local, al conceder la autorización correspondiente, tomando en cuenta que no existe irregularidad alguna al respecto.

VI. Derivado de la inspección ocular, se concluye que todas las unidades automotoras han cumplido su ciclo de uso normal, lo cual hace inviable que continúen en servicio activo al cual se destinaron; aseveración que se refuerza con el contenido de la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el día quince de agosto del año dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación.

En ese documento se define, entre otros conceptos, lo relacionado a la “vida útil” de los vehículos automotores, atribuyéndoles un período de cinco años; disposición administrativa que permite a la Comisión que suscribe tener la certeza de que aquellos bienes muebles, debido al transcurso del tiempo han concluido el tiempo por el que podían servir eficientemente a la realización de las actividades inherentes al Gobierno Municipal, y no son aptos para seguir prestando un servicio a la sociedad. Por este motivo, su permanencia en el registro de patrimonio municipal resulta inadecuada.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente.

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54 fracción LXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en correlación con los diversos 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V, 41, párrafo primero y 45 fracción II de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo, se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, a efectuar la desincorporación del registro patrimonial de ese Municipio, y ejercer actos de dominio, mediante compraventa, respecto a cuarenta y seis unidades vehiculares, conforme a los datos siguientes:

1. Camioneta Courier, marca Ford, modelo 2001, con número de serie **9BFBT32N017916010**, con factura número C 02838, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A de C.V. a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil uno.
2. Camión marca International, modelo 2009, con número de serie 3HAMMAAR99L065417, con factura número 009, expedida por Blackoil Services de México, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veinte de diciembre de dos mil nueve

- 3.** Camión canastilla, marca GMS, modelo 1994, con número de serie 1GDKC34F3RJ612256, con factura número 1067, expedida por Art's Trucks & Equipment, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintitrés de febrero de dos mil uno.
- 4.** Vehículo Contour, marca Ford, modelo 1999, con número de serie 3FABP65L1XM-114726, con factura número 114, expedida por Mar de México Comercializadora S.A de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de junio de dos mil doce.
- 5.** Vehículo Focus, marca Ford, modelo 2013, tipo Z3D, con número de serie 1FADP3E22DL229444, con factura número A000001327, expedida por autos de Tlaxcala S.A de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintisiete de junio de dos mil trece.
- 6.** Vehículo Focus, marca Ford, modelo 2013, tipo Z3D, con número de serie 1FADP3E22DL229461, con factura número A000001328, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintisiete de junio de dos mil trece.
- 7.** Camioneta marca Ford, modelo 2000, línea F-XL150, con número de serie 3FTDF1723YMA25884, con factura número C 01292, expedido por autos de Tlaxcala S.A de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintitrés de mayo de dos mil.

8. Vehículo GMC, modelo 1990, con número de serie 1GDJC34K9LE547148, con factura número 599, expedida por Faze Ocho DE RL DE CV., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha dos de marzo de dos mil dieciséis.

9. Camión marca Dodge, modelo 2000, Tipo Ram, con número de serie 3B6MC3657YM270398, con factura número 00072, expedida por Rivera Apizaco S.A de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cinco de julio de dos mil.

10. Vehículo marca Chevrolet, Modelo 2010, línea Cheyenne crew cap, con número de serie 3GCRCRE06AG115243, con factura número A 08592, expedida por García Pineda, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil nueve.

11. Vehículo Volkswagen, tipo combi, modelo 1999, con número de serie 9BWA2372XXP002921, con factura número 138236, expedida por Volkswagen de México S.A. de C.V. a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve.

12. Camioneta tipo pick-up tornado, marca GM Chevrolet, modelo 2004, con número de serie 93CXM80R74C179325, con factura número 131, expedida por Mar de México comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha once de junio de dos mil doce.

13. Camión Econoline, marca Ford, modelo 2010, línea M7G-A, con número de serie 1FTNE1EW2ADA43677, con factura número C. 18982, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha once de mayo de dos mil once.

14. Vehículo Chevy pop, marca General Motors Chevrolet, modelo 2004, con número de serie **3G1SF21614S134447**, con factura número 123, expedida por Mar de México comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

15. Vehículo CRV, marca Honda, modelo 2004, con número de serie JHLRD78844C602017, con factura número B 0901, expedida por Honda Automotores de Tlaxcala, S.A. de C.V., a Amador Valdez Ana María y endosada a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veinte de diciembre de dos mil cinco.

16. Motocicleta Marca Suzuki, modelo 2011, tipo AN125HKL1, con número de serie LC6TCJC94B0803719, con factura número 418 A, expedida por Moto-paradise Suzuki, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintinueve de marzo de dos mil once.

17. Vehículo línea Express van, marca Chevrolet, modelo 2010, con número de serie 1GNUGCD41A1122624, con factura número A 08649, expedida por García Pineda, S.A. de C.V., a favor a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintidós de diciembre de dos mil nueve.

18. Vehículo marca Chevrolet, modelo 2008, con número de serie 3GCEC14X88M109566, con factura número A 04102, expedida por Camiones García Pineda, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho.

19. Vehículo marca Ford, tipo J8N, modelo 2012, con número de serie 1FTFW1CF4CKD25953, con factura número A 000000112, expedida por Autos de Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintinueve de febrero de dos mil doce.

20. Camión marca Ford, modelo 2010, línea F-150, con número de serie 1FTEW1C84AKC32098, con factura número C 18977, expedida por autos de Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha once de mayo de dos mil once.

21. Vehículo marca Ford, tipo J8N, modelo 2012, con número de serie 1FTFW1CF5CKD25962, con factura número A 000000113, expedida por autos de Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintinueve de febrero de dos mil doce.

22. Vehículo tipo Focus, marca Ford, modelo 2012, con número de serie 1FAHP3E21CL133739, con factura número C 18975, expedida por autos de Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha once de mayo de dos mil once.

23. Camión marca Ford, modelo 2010, tipo J8N, con número de serie 1FTEW1C83AKC32318, con factura número C 18981, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha once de mayo de dos mil once.

24. Camión marca Ford, modelo 2010, tipo J8N, con número de serie 1FTEW1CB3AKC32206, con factura número C 18979, expedida por Autos de

Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha once de mayo de dos mil once.

25. Vehículo marca Ford, Tipo Focus, modelo 2013, con número de serie 1FADP3E23DL229405, con factura número A 000001324, expedida por autos de Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintisiete de junio de dos mil trece.

26. Vehículo marca Ford, tipo Focus, modelo 2013, con número de serie 1FADP3E23DL229419, con factura número A 000001325, expedida por autos de Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintisiete de junio de dos mil trece.

27. Vehículo marca Ford, tipo Focus, modelo 2013, con número de serie 1FADP3E23DL229422, con factura número A 000001326, expedida por Autos de Tlaxcala S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintisiete de junio de dos mil trece.

28. Vehículo marca Toyota, tipo Corolla, modelo 2014, con número de serie 5YFBU9HE2EP151517, con número de factura K7758, expedida por Autos Nuevos Toyota Angelópolis, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cinco de diciembre de dos mil catorce.

29. Vehículo marca Toyota, tipo Corolla, modelo 2016, con número de serie **5YFBURHE8GP510405**, con factura número K14510, expedida por Autos Nuevos Toyota Angelópolis, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

30. Vehículo marca Toyota, tipo Corolla, modelo 2014, con número de serie **5YFBU9HE2EP164087**, con factura número K7761, expedida por Autos Nuevos Toyota Angelópolis, a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cinco de diciembre de dos mil catorce.

31. Vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2014, con número de serie **MR0EX32G4E0261623**, con número de comprobante fiscal folio 143, expedido por Blindarte S. de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintiséis de agosto dos mil catorce.

32. Vehículo tipo sedan, Marca Volkswagen, modelo 1999, con número de serie 3VWS1A1B2XM519731, con factura número AN 4146, expedida por automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

33. Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2002, con número de serie 3G1SF21322S147422, con número de factura 127, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, de fecha cuatro de junio de dos mil doce.

34. Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2003, con número de serie 3G1SF21643S219832, con factura número 126, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

35. Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy B.L. Pop, modelo 2000, con número de serie 3G1SF2428YS240991, con número de factura 109, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

36. Vehículo marca Volkswagen, tipo sedan unif, modelo 1999, con número de serie 3VWS1A1B3XM519785, con factura número AN 4154, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

37. Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2004, con número de serie 3G1SF21604S132673, con factura número 125, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

38. Vehículo marca Volkswagen, tipo sedan Unif, modelo 1999, con número de serie 3VWS1A1B5XK519786, con factura número AN 4158, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

39. Vehículo marca Volkswagen, tipo sedan, modelo 2003, con número de serie 3VWS1A1B93M905699, con factura número AN 6674, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha tres de diciembre de dos mil dos.

40. Vehículo marca Volkswagen, tipo sedan unif, Modelo 1999, con número de serie 3VWS1A1B0XM519792, con factura número AN 4155, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

41. Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2003, con número de serie 3G1SF21643S220074, con factura número 115, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

42.-Vehículo Marca Volkswagen, tipo sedan unif, Modelo 1999, con número de serie 3VWS1A1B6XM519716 con número de factura AN 4138, expedida por automóviles de Santa Ana, S.A de C.V a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala en fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

43. Vehículo, Marca Chevrolet, tipo Chevy pop, Modelo 2004, con número de serie 3G1SF21654S158475, con número de factura 120, expedida por Mar de México comercializadora S.A de C.V a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

44. Vehículo marca Chevrolet, Tipo Chevy pop, modelo 2000, con número de serie 3G1SF2426YS145278, con factura número 110, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

45. Vehículo marca Chevrolet, Chevy V.L, modelo 2002, con número de serie 3GISF21352S117492, con factura número 71, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha veintisiete de abril de dos mil doce.

46. Vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy pop, modelo 2004, 3G1SF21644S132952, con número de factura 122, expedida por Mar de México Comercializadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, en fecha cuatro de junio de dos mil doce.

La validez y autenticidad de los documentos que presentó el ciudadano **Juan Salvador Santos Cedillo**, Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de las relacionadas unidades automotoras serán responsabilidad de él.

SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de las unidades descritas en el punto **PRIMERO** del presente Acuerdo, se realizarán bajo los lineamientos que dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

En atención a lo anterior, se instruye al citado Órgano Técnico del Congreso Local, para que, dentro del término improrrogable de treinta días naturales, posteriores a la solicitud que le formulé el Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, efectúe el procedimiento de subasta respectivo.

TERCERO. Luego que se efectúe la compraventa de las unidades vehiculares cuya enajenación se autoriza, y el Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, reciba el ingreso correspondiente, deberá registrarlo en su contabilidad y reportarlo en su cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario del Congreso del Estado para que, una vez aprobado el presente Acuerdo, lo notifique al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, así como a la persona Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

**DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO
PRESIDENTA**

**DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH
CABALLERO**

**AVELAR
VOCAL**

DIP.

JORGE

**ROMÁN
VOCAL**

**DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO
JIMÉNEZ
VOCAL**

**DIP. MARIBEL LEÓN
CRUZ
VOCAL**

**DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ
ORTIZ
VOCAL**

**DIP. MÓNICA SÁNCHEZ
ANGULO
VOCAL**

**DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN
MARTÍNEZ
VOCAL**

**DIP. LENIN CALVA
PÉREZ
VOCAL**

**DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN
MORALES**

**SORIA
VOCAL**

DIP.

VICENTE

**PÉREZ
VOCAL**

**DIP. DIANA TORREJÓN
RODRÍGUEZ
VOCAL**

**DIP. RUBÉN TERÁN
ÁGUILA
VOCAL**

Última hoja del dictamen con proyecto de Decreto derivado del expediente parlamentario número **LXIV 134/2023**.

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE **AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, A EFECTUAR LA DESINCORPORACIÓN DEL REGISTRO PATRIMONIAL DE ESE MUNICIPIO, Y EJERCER ACTOS DE DOMINIO, MEDIANTE COMPRA-VENTA, RESPECTO DE CUARENTA Y SEIS UNIDADES VEHICULARES;** QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

No.	DIPUTADOS	DISPENSA SEGUNDA LECTURA	VOTACIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR
		16-0	16-0
1	Ever Alejandro Campech Avelar	X	X
2	Diana Torrejón Rodríguez	X	X
3	Jaciel González Herrera	✓	✓
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	✓
5	Vicente Morales Pérez	✓	✓
6	Lenin Calva Pérez	X	X
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	✓
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	✓
9	Maribel León Cruz	✓	✓
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	✓	✓
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	✓
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	✓
13	Bladimir Zainos Flores	✓	✓
14	Miguel Ángel Covarrubias Cervantes	X	X
15	María Guillermina Loaiza Cortero	✓	✓
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	X	X
17	Fabrizio Mena Rodríguez	P	P
18	Blanca Águila Lima	X	X
19	Juan Manuel Cambrón Soria	X	X
20	Lorena Ruíz García	✓	✓
21	Laura Alejandra Ramírez Ortíz	✓	✓
22	Rubén Terán Águila	X	X
23	Marcela González Castillo	✓	✓
24	Jorge Caballero Román	✓	✓
25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	✓

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, A QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y ARMONICEN SUS REGLAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. LXIV/033/2024



COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnado el expediente LXIV/033/2024 que contiene la **INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR, LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y PARA QUE ARMONICEN SUS REGLAMENTOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS, 4 FRACCIÓN III, Y 14, DE LA LEY DE RESIDUOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y QUINTO TRANSITORIO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DEL ESTADO DE TLAXCALA**, que presentó la diputada Marcela González Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracciones XX y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37 fracciones XX y XXVII, 57 fracción III, 62 ter fracción I, 83, 124 y 125 párrafo primero del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTANDOS

1. Con fecha doce de marzo del año dos mil veinticuatro, en sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía, la Diputada Marcela González Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presentó la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente, a los ayuntamientos de los municipios del estado de Tlaxcala, para que, a través de las autoridades competentes, fortalezcan las acciones necesarias, para promover e implementar, la separación de residuos sólidos urbanos, y para que armonicen sus Reglamentos, para la implementación, de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a los artículos, 4 fracción III, y 14, de la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala y quinto transitorio, de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Estado de Tlaxcala.
2. Para motivar su propuesta la diputada promovente refiere en la parte expositiva la necesidad de armonizar el marco normativo que rige a los Municipios, a fin de dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, que en su Artículo 4 fracción III, así como en la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala en su Artículo 14 y en la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, quinto transitorio, se determina la correspondiente armonización y ajuste reglamentario a los contenidos de las respectivas normas.
3. Con fecha 15 de marzo de 2024, se celebró sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se procedió a la lectura y discusión del presente proyecto de Dictamen dentro del expediente parlamentario citado al rubro, relativo a la iniciativa del rubro, la cual, para fines de dictamen, se analiza en el presente instrumento legislativo.

Con los antecedentes descritos, Comisión Dictaminadora emite los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos.

La clasificación de las resoluciones de este Poder Soberano Local es invocada en términos del artículo 10, apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición normativa que en su fracción II dispone:

Artículo 10. *Serán emitidas las resoluciones siguientes:*

A. ...

B. *Acuerdos:*

I.a VI. ...

VII. Las que determine expresamente el Pleno.

SEGUNDO. Las atribuciones de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, se encuentran establecidas en el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, donde genéricamente se contemplan las atribuciones para **“recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”**, así como para **“cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados”**; respectivamente.

Específicamente, la competencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra establecida en el artículo 62 Ter fracción V del Ordenamiento Reglamentario citado, donde se prevé que le corresponde Promover

y fomentar la preservación de los recursos naturales y procurar las medidas legislativas necesarias para su aprovechamiento y conservación.

Por ende, dado que en lo particular la materia del expediente parlamentario consiste en exhortar a las autoridades municipales a armonizar su correspondiente reglamentación en materia de cumplimiento del mandato de legislación ambiental, es de concluirse que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es **COMPETENTE** para dictaminar al respecto.

TERCERO. Una vez fijada la competencia de esta Comisión de Dictamen, es procedente el análisis de la Iniciativa de referencia, mismo que, para mayor referencia de las y los integrantes de esta colegialidad, se transcribe en sus términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

- 1. La gestión adecuada de los residuos sólidos es un aspecto fundamental para preservar el medio ambiente, prevenir la contaminación y proteger la salud pública.*
- 2. Para garantizar un ambiente sano, seguro y eficiente para los ciudadanos residentes en los municipios del Estado de Tlaxcala es esencial que los municipios respeten la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala, reconozcan las atribuciones establecidas y se preocupen en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.*
- 3. El cumplimiento de la ley conduce a una mejor regulación por parte de las autoridades, respecto a la gestión de estos residuos.*
- 4. Resulta imprescindible la adopción de un marco normativo claro y eficaz que regule todas las etapas del proceso de gestión de residuos sólidos, como el delimitar las responsabilidades de las autoridades municipales, las empresas prestadoras de servicios,*

5. *los productores y los ciudadanos en materia de gestión de residuos, fomentando la colaboración y la participación activa de todos los sectores de la sociedad.*

CUARTO. Que, de los anteriores razonamientos esgrimidos en la parte expositiva de la Iniciativa de mérito, es claro que se trata de un exhorto para que en el ejercicio de su autonomía municipal y de sus facultades reglamentarias establecidas en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios ajusten sus correspondientes marcos de actuación de carácter reglamentario, a fin de que sus contenidos queden alineados a los siguientes preceptos:

De la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala:

Artículo 4. *En la formulación, implementación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos sólidos, se observarán los principios siguientes:*

III. Fortalecimiento institucional: *Mejorar las capacidades de las instituciones vinculadas a la gestión integral de residuos, para asegurar su sostenibilidad, mediante acciones articuladas a nivel municipal y estatal, con participación efectiva del sector público, privado y la ciudadanía;*

...

Artículo 14. *Son atribuciones de los municipios por conducto de sus respectivos ayuntamientos:*

- I. *Realizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos, teniendo la posibilidad de coordinarse con el gobierno estatal o federal, de acuerdo a las bases establecidas en la presente Ley;*

- II. *Formular y ejecutar los Programas Municipales, alineados a lo que establece el Programa Estatal, involucrando para ello a los distintos sectores de la sociedad;*
- III. *Expedir reglamentos y disposiciones aplicables a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley;*
- IV. *Preservar, proteger y sanear el ambiente de su territorio, respecto de la contaminación por manejo y disposición de residuos sólidos;*
- V. *Operar y controlar por sí o por medio de gestores, los servicios municipales o intermunicipales de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, en los términos que se establecen en la legislación y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;*
- VI. *Suscribir los convenios de coordinación entre sí y con los municipios de las entidades federativas para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía;*
- VII. *Diseñar, ejecutar y evaluar un programa para la instalación y el mantenimiento de contenedores de residuos sólidos en puntos estratégicos de su territorio y la recolección de los residuos depositados en ellos, con perspectiva de separación de residuos;*
- VIII. *Otorgar las autorizaciones y concesiones para la prestación de una o más de las actividades que comprenden la prestación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos;*
- IX. *Implementar, administrar y actualizar un padrón municipal de generadores de residuos sólidos, así como el registro de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos;*
- X. *Verificar el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de residuos sólidos urbanos y, en su caso, imponer las sanciones y medidas de seguridad aplicables;*

- XI. *Atender de manera oportuna las quejas ciudadanas por manejo inadecuado, prestación deficiente de servicios públicos y contaminación por residuos sólidos;*
- XII. *Participar activamente en los programas y campañas que organice el Gobierno del Estado en materia de residuos sólidos;*
- XIII. *Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos sólidos urbanos;*
- XIV. *Establecer y ejecutar las disposiciones y los esquemas necesarios para la recaudación de ingresos municipales proporcionales y suficientes para la sustentabilidad de los servicios municipales de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;*
- XV. *Coordinarse con el gobierno estatal y federal en la aplicación de instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción, despliegue tecnológico y material que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos, y*
- XVI. *Las demás que le otorgue la presente Ley, las Normas Oficiales Mexicanas y otros ordenamientos jurídicos aplicables.*

De la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala:

ARTÍCULO QUINTO. *El Ejecutivo Estatal y cada uno de los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente Ley, deberán llevar a cabo las adecuaciones en los Reglamentos que correspondan para la implementación de la misma.*

En este sentido, el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, establece que una vez que ha sido publicada e iniciada su vigencia, los Ayuntamientos tendrán noventa días para ajustar su normatividad a los contenidos establecidos en la misma.

Asimismo se establece que los contenidos de armonización deberán ser integrales, es decir, considerar que deben ajustarse en lo correspondiente a lo establecido en el Orden Jurídico Estatal, por lo que en el ejercicio de su atribución, este Congreso considera loable este respetuoso llamamiento a los gobiernos de los Municipios, a fin de que, de no haber procedido, realicen sus correspondientes armonizaciones a fin de estar en condiciones de aplicar el marco jurídico vigente.

Finalmente y en mérito de lo aquí establecido, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse el siguiente:

ACUERDO


PRIMERO. Se exhorta respetuosamente, a los ayuntamientos de los municipios del estado de Tlaxcala, para que, a través de las autoridades competentes, fortalezcan las acciones necesarias, para promover e implementar, la separación de residuos sólidos urbanos, y para que armonicen sus Reglamentos, para la implementación, de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a los artículos, 4 fracción III, y 14, de la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala y quinto transitorio, de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta al secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, para que comunique el contenido del presente Acuerdo a los Presidentes Municipales, para los efectos legales conducentes.


TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.




Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, a los 15 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro.



DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES



DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DIP. FÁTIMA GUADALUPE PÉREZ VARGAS
VOCAL DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ÚLTIMA FOJA DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No.
LXIV/033/2023.

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.



VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, A QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y ARMONICEN SUS REGLAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

No.	DIPUTADOS	DISPENSA SEGUNDA LECTURA	VOTACIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR
		18-0	18-0
1	Ever Alejandro Campech Avelar	✓	✓
2	Diana Torrejón Rodríguez	X	X
3	Jaciel González Herrera	X	X
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	✓
5	Vicente Morales Pérez	✓	✓
6	Lenin Calva Pérez	X	X
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	✓
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	✓
9	Maribel León Cruz	✓	✓
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	✓	✓
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	✓
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	✓
13	Bladimir Zainos Flores	✓	✓
14	Miguel Ángel Covarrubias Cervantes	X	X
15	María Guillermina Loaiza Cortero	✓	✓
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	✓	✓
17	Fabricio Mena Rodríguez	P	P
18	Blanca Águila Lima	X	X
19	Juan Manuel Cambrón Soria	X	X
20	Lorena Ruíz García	✓	✓
21	Laura Alejandra Ramírez Ortiz	✓	✓
22	Rubén Terán Águila	✓	✓
23	Marcela González Castillo	✓	✓
24	Jorge Caballero Román	✓	✓
25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	✓

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE APIZACO, CHIAUTEMPAN, CUAPIAXTLA, EL CARMEN TEQUEXQUEUITLA, ESPAÑITA, IXTENCO, MAZATECOHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN HUACTZINCO, TEOLOCHOLCO, TEPETITLA DE LARDIZABAL, TEPEYANCO, TERRENATE, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCO, TOCATLÁN XALOZTOC, XALTOCAN, ZACATELCO, ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, ALTLZAYANCA, LA MAGADALENA TLALTELULCO NATIVITAS, PANOTLA SAN JOSPE TEACALCO, SANTA CRUZ QUILEHTLAY TETLATLAHUCA, PARA QUE EXPIDAN O ARMONICEN SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.



TLAXCALA

LXIV LEGISLATURA



EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. LXIV/248/2023

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnado el expediente LXIV/248/2023 que contiene la **INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE TLAXCALA, QUE NO CUENTEN CON UN REGLAMENTO MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL A QUE LO EXPIDAN O A REALIZAR LAS MODIFICACIONES A SU RESPECTIVO REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL, A EFECTO DE QUE ÉSTE SE ENCUENTRE EN ARMONÍA CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA**, que presentó el Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracciones XX y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37 fracciones XX y XXVII, 57 fracción III, 62 ter fracción I, 83, 124 y 125 párrafo primero del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTANDOS

1. Con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, en sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía, el Diputado Bladimir Zainos Flores integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala presentó la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente, a los a los municipios que conforman el estado de Tlaxcala, que no cuenten con un reglamento municipal de bienestar animal a

que lo expidan o a realizar las modificaciones a su respectivo reglamento municipal en materia de bienestar animal, a efecto de que éste se encuentre en armonía con las disposiciones contenidas en la ley de bienestar animal para el estado de Tlaxcala.

2. Para motivar su propuesta el Diputado promovente refiere en la parte expositiva que en diciembre del año dos mil veintidós, fue aprobada por este Honorable Congreso, la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala; Dicha Ley establece en su ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO que:

“Los ayuntamientos de la Entidad deberán expedir o realizar las modificaciones a su respectivo Reglamento municipal en materia de bienestar animal, a efecto de que éste se encuentre en armonía con las disposiciones contenidas en el presente Decreto. Para tal efecto, contarán con un plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.”

No obstante, lo anterior, y a pesar de haber fenecido el término establecido en el transitorio referido; 26 de los 60 Municipios, han sido omisos en expedir y publicado su respectivo Reglamento Municipal en Materia de Bienestar Animal.

3. Con fecha 15 de marzo de 2024 se celebró sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se procedió a la lectura y discusión del presente proyecto de Dictamen dentro del expediente parlamentario citado al rubro, relativo a la iniciativa del rubro, la cual, para fines de dictamen, se analiza en el presente instrumento legislativo.

Con los antecedentes descritos, Comisión Dictaminadora emite los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos.

La clasificación de las resoluciones de este Poder Soberano Local es invocada en términos del artículo 10, apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición normativa que en su fracción II dispone:

Artículo 10. *Serán emitidas las resoluciones siguientes:*

A. ...

B. Acuerdos:

I.a VI. ...

VII. Las que determine expresamente el Pleno.

SEGUNDO. Las atribuciones de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, se encuentran establecidas en el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, donde genéricamente se contemplan las atribuciones para ***“recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”***, así como para ***“cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados”***; respectivamente.

Específicamente, la competencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra establecida en el artículo 62 Ter fracciones IV y V del Ordenamiento Reglamentario citado, donde se prevé promover ante las autoridades competentes la implementación de políticas públicas en la preservación del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales; así mismo las demás que le confiera el Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Coordinación y Concertación Política.

Por ende, dado que en lo particular la materia del expediente parlamentario consiste en exhortar a las autoridades municipales a emitir un reglamento municipal de bienestar animal o a realizar las modificaciones a su respectivo reglamento municipal en materia de bienestar animal a efecto de que éste se encuentre en

armonía con las disposiciones contenidas en la ley de bienestar animal para el estado de Tlaxcala y la presente iniciativa fue asignada por la Mesa Directiva del Congreso del Estado, es de concluirse que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es **COMPETENTE** para dictaminar al respecto.

TERCERO. Una vez fijada la competencia de esta Comisión de Dictamen, es procedente el análisis de la Iniciativa de referencia, mismo que, para mayor referencia de las y los integrantes de esta colegialidad, se transcribe en sus términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocupa el tercer lugar en maltrato animal a nivel Latinoamérica.

Para dar una idea más precisa, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que aproximadamente 7 de cada 10 animales domésticos en México sufren de algún tipo de maltrato.

Por su parte, la Organización Defensora de los Animales AnimaNaturalis, indica que más del 70 por ciento de los perros se encuentran en situación de calle, mientras que para el caso de los gatos es más del 60 por ciento. La adopción de perros y gatos únicamente ha aumentado un 11% en el último año.

*El maltrato animal se define como **“un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, puede llevarlo a la muerte”**.*

El espectro del maltrato o crueldad animal va más allá de solo la provocación de algún tipo de daño.

Se considera maltrato animal acciones como:

- *Abandonarlos.*
- *No tenerlos en buenas condiciones de salud.*
- *No brindarles espacios para su recreación.*
- *Privarlos de alimentación.*

Resulta inaceptable que México ocupe uno de los primeros lugares en maltrato animal, pues esto no solo representa un alto grado de violencia, sino que también muestra la clara postura de muchos de los habitantes de este país, la mayoría, guiados por un comportamiento de arrebatos y crueldad en cuanto al cuidado de los animales de compañía. No digamos los que no comparten el hogar, en los cuales se piensa poco.

El maltrato animal es un foco rojo para la sociedad en la que sucede, no solamente por el comportamiento agresivo que implica hacia un ser vivo, sino por el ejemplo que se da cotidianamente. Todos los seres vivos son importantes y merecen gozar del derecho de una vida digna y tranquila

Por lo que respecta a nuestro Estado, en diciembre del año dos mil veintidós, fue aprobada por éste Honorable Congreso, la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala.

Dicha Ley establece en su ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO que:

“Los ayuntamientos de la Entidad deberán expedir o realizar las modificaciones a su respectivo Reglamento municipal en materia de bienestar animal, a efecto de que éste se encuentre en armonía con las disposiciones contenidas en el presente Decreto. Para tal efecto, contarán con un plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.”

No obstante lo anterior, y a pesar de haber fenecido el término establecido en el transitorio referido, la mayoría de los Municipios del Estado han sido omisos al respecto, toda vez que solo 24 de los 60 Municipios, han expedido y publicado su respectivo Reglamento Municipal en Materia de Bienestar Animal.

Por lo anterior, El Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), presentó ante éste Honorable Congreso una petición, a efecto de que los Municipios del Estado que aún no cuenten con un Reglamento Municipal De Bienestar Animal lo expidan, o bien, los que ya cuentan con uno, realicen las modificaciones necesarias a su Reglamento Municipal, a efecto de que éste se encuentre en armonía con la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala”

CUARTO. Que, de los anteriores razonamientos esgrimidos en la parte expositiva de la Iniciativa de mérito, es claro que se trata de un exhorto para que en el ejercicio de su autonomía municipal y de sus facultades reglamentarias establecidas en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios expidan o ajusten sus correspondientes marcos de actuación de carácter reglamentario, a fin de que sus contenidos queden alineados a los siguientes preceptos:

De la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala en sus artículos transitorios.

ARTÍCULO SEXTO. *Los ayuntamientos de la Entidad deberán expedir o realizar las modificaciones a su respectivo Reglamento municipal en materia de bienestar animal, a efecto de que éste se encuentre en armonía con las disposiciones contenidas en el presente Decreto. Para tal efecto, contarán con un plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.*



En este sentido, el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, establece que una vez que ha sido publicada e iniciada su vigencia, los Ayuntamientos tendrán sesenta días para expedir o realizar las modificaciones a su respectivo reglamento en materia de bienestar animal, por lo que en el ejercicio de su atribución, este Congreso considera loable este respetuoso llamamiento a los gobiernos de los Municipios, a fin de que, de no haber procedido, realicen sus correspondientes armonizaciones a fin de estar en condiciones de aplicar el marco jurídico vigente.

Finalmente, y en mérito de lo aquí establecido, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente, a los ayuntamientos de los municipios de Apizaco, Chiautempan, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Españita, Ixtenco, Mazatecochco De María Morelos, San Juan Huactzinco, Teolocholco, Tepetitla De Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetla De La Solidaridad, Tlaxco, Tocatlán, Xaloztoc, Xaltocan, Zacatelco, Zitaltepec De Trinidad De Sánchez Santos, Atltzayanca, La Magdalena Tlatelulco, Nativitas, Panotla, San José Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Tetlatlahuca del estado de Tlaxcala, para que expidan o armonicen sus Reglamentos en materia de Bienestar Animal, dando cumplimiento al artículo Sexto transitorio de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta al secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, para que comunique el contenido del presente Acuerdo a los Presidentes Municipales referidos, para los efectos legales conducentes.


TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtécatl, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinticuatro.



TLAXCALA

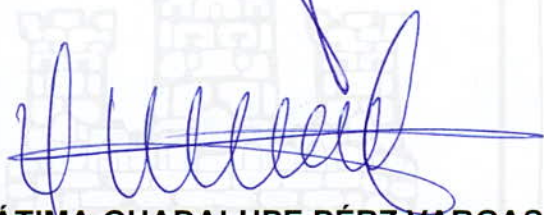
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA



DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES



DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DIP. FÁTIMA GUADALUPE PÉREZ VARGAS
VOCAL DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ÚLTIMA FOJA DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No.
LXIV/248/2023.

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.



VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE APIZACO, CHIAUTEMPAN, CUIPIAXTLA, EL CARMEN TEQUEXQUEUITLA, ESPAÑITA, IXTENCO, MAZATECOHCO DE JOSÉ MARÁI MORELOS, SAN JUAN HUACTZINCO, TEOLOCHOLCO, TEPETITLA DE LARDIZABAL, TEPEYANCO, TERRENATE, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCO, TOCATLÁN XALOZTOC, XALTOCAN, ZACATELCO, ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, ALTLZAYANCA, LA MAGADALENA TLALTELULCO NATIVITAS, PANOTLA SAN JOSPE TEACALCO, SANTA CRUZ QUILEHTLAY TETLATLAHUCA, PARA QUE EXPIDAN O ARMONICEN SUS REGALMENTOS EN AMTERIA DE BIENESTAR ANIMAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

		DISPENSA SEGUNDA LECTURA	VOTACIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR
No.	DIPUTADOS	15-0	15-0
1	Ever Alejandro Campech Avelar	✓	✓
2	Diana Torrejón Rodríguez	X	X
3	Jaciel González Herrera	X	X
4	Mónica Sánchez Ángulo	✓	✓
5	Vicente Morales Pérez	✓	✓
6	Lenin Calva Pérez	X	X
7	Gabriela Esperanza Brito Jiménez	✓	✓
8	Lupita Cuamatzi Aguayo	✓	✓
9	Maribel León Cruz	X	X
10	Miguel Ángel Caballero Yonca	X	X
11	Fátima Guadalupe Pérez Vargas	✓	✓
12	Brenda Cecilia Villantes Rodríguez	✓	✓
13	Bladimir Zainos Flores	✓	✓
14	Miguel Ángel Covarrubias Cervantes	X	X
15	María Guillermina Loaiza Cortero	✓	✓
16	José Gilberto Temoltzin Martínez	✓	✓
17	Fabricio Mena Rodríguez	P	P
18	Blanca Águila Lima	X	X
19	Juan Manuel Cambrón Soria	X	X
20	Lorena Ruíz García	✓	✓
21	Laura Alejandra Ramírez Ortíz	✓	✓
22	Rubén Terán Águila	X	X
23	Marcela González Castillo	✓	✓
24	Jorge Caballero Román	✓	✓

25	Reyna Flor Báez Lozano	✓	✓
----	------------------------	---	---

10. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

CORRESPONDENCIA 19 DE MARZO DE 2024.

- 1.- Oficio SIX.SIN/19/2024, que envía Araceli Angulo Muñoz, Síndico del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del cual informa a la Comisión de Asuntos Municipales de que no es voluntad del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, continuar con los trabajos de deslinde con el Municipio de Tepeyenco.
- 2.- Oficio SIX.SIN/20/2024, que envía Araceli Angulo Muñoz, Síndico del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del cual informa a la Comisión de Asuntos Municipales de que no es voluntad del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, continuar con los trabajos de deslinde con el Municipio de Teolocholco.
- 3.- Copia del oficio SMMJMMLTAX 03/63/2024, que dirige José Luis Mena Mena, Síndico del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, a la C. Leandra Xicohtencatl Muñoz, Presidenta Municipal, a través del cual le informa que no cuenta con ningún personal para el análisis, revisión y validación de la cuenta pública y demás documentos contables.
- 4.- oficio MSLA/001/2024, que envían las regidoras Segunda y Cuarta del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, mediante el cual solicitan a este Congreso designar una comisión para que se encargue de nombrar a uno de los miembros del Cabildo, como suplente de Oracio Tuxpan Sánchez.

- 5.- Copia del oficio 5C/TES/0132/2024, que envía la C.P. Alicia Cuamatzi Vázquez, Tesorera del Municipio de Tlaxco, al Lic. Armando Flores López, Presidente Municipal, mediante el cual le hace entrega de los Estados Financieros y la Cuenta Pública del mes de febrero del año 2024.
- 6.- Oficio TCA/780/2024, que dirige Miguel Ángel Tlapale Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite acta circunstanciada para que en el ámbito de sus facultades de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del Congreso del Estado, tenga conocimiento y en su caso proceda a determinar viable el inicio del procedimiento respectivo a los integrantes del Ayuntamiento de Zacatelco, con motivo del incumplimiento al convenio realizado en el juicio laboral 202/2013-C.
- 7.- Copia del oficio DCGCH/DCP/0389/2024, que envía el C.P. Román Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria, a los Directores Administrativos de las Entidades de los Organismos Públicos Descentralizados del poder Ejecutivo del Estado y Fideicomisos Públicos, mediante el cual remite los lineamientos para el proceso de revisión y presentación de la cuenta pública 2024, para organismos públicos descentralizados.
- 8.- Copia del oficio DCGCH/DCP/0391/2024, que dirige el C.P. Román Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria, a los Directores Administrativos de los Poderes y Organismos Autónomos, por el que remite los lineamientos generales para la integración de la cuenta pública de los poderes y organismos autónomos 2024.
- 9.- Oficio sin número que dirige Manuel Añorve Baños, Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a través del cual solicita a este Congreso la colaboración en el proyecto editorial sobre la importancia del Senado como garante del pacto federal, con un breve artículo.

- 10.- Copia del escrito que envía Severo Bernal Jiménez, Presidente de Comunidad de Santa Elena Teacalco, Municipio de Sana Apolonia Teacalco, a la Lic. Yazmin Rivera Álvarez, Facilitadora del Órgano Especializado de Mecanismos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tlaxcala, a través del cual interpone recurso de nulidad de la Carpeta de Investigación OEMASC/FED/TLAX/DEL TLAX/257/2023-16/23 y/o OEMASC/FED/TLAX/DEL TLAX/257/2023-117/23.
- 11.- Copia del escrito que dirigen representantes legales de Mexican Silicates, S.A de C.V., y AS Maquila México S. de R.L. de C.V., a la C. María Antonia Solís Pérez, Síndico del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual le solicitan se les proporcione el calendario de ejecución de obra y la comprobación de gasto y aportación de material relativo al convenio tripartita.
- 12.- Escrito que dirigen integrantes del Consejo Municipal en Defensa del Medio Ambiente del Municipio de Panotla, a través del cual solicita a este Congreso se les expida copia certificada de los puntos de acuerdo respecto a la solicitud de fecha 06 de marzo del presente año.
- 13.- Copia del escrito que dirige el Lic. Pablo Elpidio Bonilla Bolaños, a la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, quien le manifiesta hechos cometidos por la actual administración del Municipio de Huamantla.
- 14.- Oficio LXIV DTR 154/2024, que envía la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia por tiempo indefinido, para separarse del cargo de Diputado, a partir del día veintiséis de marzo del año dos mil veinticuatro, al concluir la sesión ordinaria correspondiente.
- 15.- Oficio DIP. MACC/038/2024, que envía el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual solicita a este Congreso licencia

por tiempo indefinido al cargo legislativo que ostenta a partir del día 26 de marzo del año 2024, al concluir la sesión ordinaria correspondiente, dejando sin efectos el previamente presentado con efectos al 1 de abril de 2024.



11. ASUNTOS GENERALES.

